

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Viña del Mar  
CAUSA ROL : C-855-2018  
CARATULADO : VILLALOBOS/DÍAZ

Viña del Mar, trece de Julio de dos mil veinte.-

Visto:

Con fecha 27 de febrero de 2018, comparece don **Eduardo Alberto Contreras Lagos**, abogado, domiciliado en calle Aníbal Pinto N° 509, oficina 302, comuna de Concepción, en representación según se acreditará de doña **Paola Roxana Parra Contreras**, cédula nacional de identidad N° 13.379.579-0, viuda, técnico en educación parvularia y de **Emilia Belén Villalobos Parra**, cédula nacional de identidad N° 23.856.923-0, pre-escolar, soltera, menor de edad, representada por su madre recién individualizada, ambas domiciliadas en Pasaje Las Dalias, casa 1954, Villa Manquimávida, comuna de Chiguayante, quien en la representación que inviste viene en deducir **demanda de indemnización de perjuicios** en juicio ordinario en contra de **TAD SpA**, giro transporte de carga, Rut N° 76.412.470-7, representada por don **Fernando Ramón Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 12.627.604-4 y/o don **Jaime Roberto Vilajuana Rigau**, cédula nacional de identidad N° 6.817.160-1, todos domiciliados en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón, en su calidad de continuadora legal de la empresa de **Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad limitada E.I.R.L.**, del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, **en su calidad de mero tenedor** del vehículo Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY92-2; y solidariamente y/o subsidiariamente y/o simplemente conjunta, según en derecho corresponda, en contra de doña **María Silvia del Rosario Contreras Romo**, cédula nacional de identidad N° 5.718.830-8, dueña de casa, viuda, mayor de edad, domiciliada en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o en calle Marcel Duhaut N° 2890, comuna de Providencia y/o Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; de don **Marcelo Antonio Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 10.746.151-5, factor de comercio, casado, mayor de edad, domiciliado en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o Avda. Alejandro Galaz N° 1100, comuna de Casablanca y/o en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; de don **Fernando Ramón Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 12.627.604-4, factor de comercio, casado, mayor de edad, domiciliado en calle Chacabuco N° 219, comuna de Casablanca y/o en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; de don **Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 13.025536-1, factor de comercio, casado, mayor de edad, domiciliado en Avda. Alejandro Galaz N° 1110,



comuna de Casablanca y/o en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; y doña **Sylvia Valericia Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 13.766.222-1, factor de comercio, casada, mayor de edad, domiciliada en General Oscar Bonilla N° 537, Villa Gabriela Mistral, comuna de Casablanca y/o en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; estos últimos en su calidad de herederos y a prorrata de sus cuotas hereditarias en la sucesión del causante don **Alberto Ramón Díaz Parraguez**, cédula de identidad N° 5.237.035-3, quien era propietario del Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3.

**Solicita, tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario** en contra de **TAD SpA**, giro transporte de carga, Rut N° 76.412.470-7, representada por don Fernando Ramón Díaz Contreras y/o don Jaime Roberto Vilajuana Rigau, todos ya individualizados, en su calidad de continuadora legal de Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L., del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, quien era el mero tenedor del vehículo Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY 92-2; y solidariamente y/o subsidiariamente y/o simplemente conjunta, según en derecho corresponda de doña **María Silvia del Rosario Contreras Romo**; don **Marcelo Antonio Díaz Contreras**; de don **Fernando Ramón Díaz Contreras**; de don **Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras**; y doña **Sylvia Valericia Díaz Contreras**, todos ya individualizados, en su calidad de herederos y a prorrata de sus cuotas hereditarias en la sucesión del causante don **Alberto Ramón Díaz Parraguez**, cédula de identidad N° 5.237.035-3, quien era propietario del Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3, admitirla a tramitación, acogiendo la demanda de autos, y en definitiva declarar y condenarlos:

a) A pagar a doña Paola Roxana Contreras Parra y a Emilia Belén Villalobos Parra la suma de **\$271.440.000.-** por concepto de **daño lucro** cesante; de ser procedente, las sumas se pagarán debidamente reajustadas, según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor o el indicador que legalmente haga sus veces, entre la fecha del accidente de autos, y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. En subsidio para que sean condenados a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que con esa misma base se determine.

b) A pagar a doña Paola Roxana Parra Contreras la suma de **\$300.000.000.-** por concepto de **daño moral**; de ser procedente, las sumas se pagarán debidamente reajustadas, según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor o el indicador que legalmente haga sus veces, entre la fecha del accidente de autos, y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. En subsidio para que sean condenados a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que con esa misma base se determine.

c) A pagar a Emilia Belén Villalobos Parra la suma de **\$400.000.000.-** por concepto de **daño moral**, de ser procedente, las sumas se pagarán debidamente reajustadas, según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor o el indicador que legalmente haga sus veces, entre la fecha del accidente de autos, y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. En subsidio para que sean



condenados a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que con esa misma base se determine.

d) Que se declare a los demandados, ya individualizados, solidariamente y/o subsidiariamente y/o simplemente conjunta, según en derecho corresponda, responsables de los daños y perjuicios señalados, en su calidad de propietario y mero tenedor del vehículo responsable del accidente en estos autos y, consecuentemente, se les condene al pago de las indemnizaciones solicitadas en esta presentación respecto de la totalidad de los actores, o en subsidio a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que se determine.

e) A pagar las costas de la causa.

**En subsidio** de lo anterior, y para el improbable caso que no se acoja la demanda de autos, **solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicio** en contra de TAD SpA, giro transporte de carga, Rut N° 76.412.470-7, representada por don **Fernando Ramón Díaz Contreras**, y/o don **Jaime Roberto Vilajuana Rigau**, todos ya individualizados, en su calidad de continuadora legal de **Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad limitada E.I.R.L.**, del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, *fundado en su responsabilidad extracontractual derivada de su condición de empleador del conductor del Tractocamión y semirremolque* de autos Sr. **José Luis Saldivia Opazo**, cédula nacional de identidad N° 11.569.872-9, quien se desempeñaba, al momento del accidente, como empleado de la empresa de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y según lo dispuesto en el artículo 2320 del Código Civil, acogerla a trámite y en todas sus partes, y en definitiva condenar a la demandada a pagar a sus representadas las indemnizaciones y sumas señaladas en las letras a, b y c precedentes las que se dan por expresamente reproducidas, todo ello con costas.

Con fecha 9 de mayo de 2018, la parte demandada contestó la demanda.

Con fecha 17 de mayo de 2018, la parte demandante evacuó el trámite de réplica.

Con fecha 25 de mayo de 2018, la parte demandada evacuó el trámite de réplica.

Con fecha 14 de noviembre de 2018, se llevó a efecto audiencia de conciliación decretada en autos.

Con fecha 16 de noviembre de 2018 y 23 de mayo de 2019, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 16, 17 de mayo, 7, 14, 15 de junio, 13 y 17 de julio de 2019, la demandante acompañó documentos.

Con fecha 30, 31 de mayo, 11 de junio de 2019, la parte demandada acompañó documentos.

Con fecha 11 de junio de 2019, se recepcionó oficio de AFP Habitat.

Con fecha 12 de junio de 2019, se llevó a efecto audiencia de prueba testimonial de la parte demandada.

Con fecha, 13 y 14 de junio de 2019, se llevó a efecto audiencia de prueba testimonial de la parte demandante.

Con fecha 28 de junio de 2019, se recepcionó oficio de Carabineros de Chile, Prefectura de Cautín.

Con fecha 2 de julio de 2019, se recepcionó oficio N° 378-2019 de Instituto de Seguridad del Trabajo.

Con fecha 22 de julio de 2019, se recepcionó oficio N° 2126, proveniente del Ministerio Público.



Con fecha 5 de septiembre de 2019, se recepcionó oficio N° 242-2019, proveniente del Servicio Médico Legal.

Con fecha 13 de septiembre de 2019, se recepcionó oficio N° 229, proveniente de Carabineros de Chile.

Con fecha 29 de noviembre de 2019, se recepcionó oficio proveniente de Carabineros de Chile, tenencia Capitán Pastene, Lumaco.

Con fecha 4 de febrero de 2030, se recepcionó oficio del 22 Juzgado Civil de Santiago.

Con fecha 17 de febrero de 2020, se recepcionó oficio N° 573, de la Prefectura de investigaciones de accidentes en el tránsito.

Se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**I.- EN CUANTO A LA OBJECION DE DOCUMENTOS:**

Con fecha 20 de junio de 2019 la parte demandada objetó los siguientes documentos:

- Objetó los documentos acompañados por la contraria a folio 125, consistentes en licencia de conducir de don David Villalobos Rivera, la cual daría cuenta de la falta de conocimientos técnicos de cómo se maneja un tracto camión con semirremolque. Expone que sobre el particular tal documento nada acredita, pues don David Villalobos desarrollaba sus labores como experto en seguridad (prevencionista de riesgo) y ningún reproche se ha dirigido a su falta de conocimientos en el área de seguridad. Agrega, que llama la atención el argumento de la contraria para darle valor a ese documento en los términos que señala, si no atiende a las funciones profesionales que el Sr. Villalobos desarrollaba.

Que, atendido los argumentos esgrimidos en la presente objeción, y considerando que estos dicen relación con el valor probatorio que se asignará al documento en la presente sentencia, **se negará lugar a la objeción deducida.**

- Objetó los documentos acompañados a folio 126, consistentes en las declaraciones de don Aristóteles Miranda Escobar, Jorge Alberto Aguirre Madrano, José Antonio Bustos Riquelme, Rubén José Campos Hidalgo y Patricio Rubén Elizalde Jofré, fundado en que se tratan de supuestas declaraciones prestadas por dichas personas y que no han sido reconocidas en juicio por quien aparecen supuestamente otorgadas. Que, al mismo tiempo tales documentos afectan el debido proceso y la bilateralidad de la audiencia, pues se niega a su parte la posibilidad de haberlos interrogado en igualdad de condiciones.

Que, considerando que los fundamentos de la presente objeción dicen relación con el valor probatorio que se asignará a los mismos en la presente sentencia, **se negará lugar a la objeción formulada.**

- Objetó, además, los documentos acompañados a folio 127, consistentes en declaraciones prestadas por don Homero Cartes Jara y don Pedro Muñoz León, que no han sido reconocidas en juicio por quien aparecen supuestamente otorgadas. Que, al mismo tiempo tales documentos afectan el debido proceso y la bilateralidad de la audiencia, pues se niega a su parte la posibilidad de haberlos interrogado en igualdad de condiciones.

Que, considerando que los fundamentos de la presente objeción dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo, **se negará lugar a la objeción formulada.**

- Objetó, asimismo, los documentos acompañados a folio 128, consistentes en tres informes técnicos, a saber, N° 36-A-2014, N° 09-B-2013 y N° 21-B-2014. Agrega, que los objeta y observa por ser fotocopias simples que afectan su autenticidad, mismos documentos que no han sido reconocidos en juicio por quienes



supuestamente los emitieron, afectando con ello el debido proceso y el principio de bilateralidad de la audiencia que impide a su parte indagar sobre el rigor técnico de los mismos, razón por la cual no se les puede valorar, por lo que se les debe negar todo valor probatorio.

Que, se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo, y al no existir antecedentes relativos a la falta de autenticidad alegada.

- Objetó el documento acompañado a folio 129, consistente en protocolo de autopsia IX-TMC-159-2014, pues se trata de una fotocopia simple, lo que permite cuestionar su autenticidad, pues tampoco ha sido reconocido en juicio por la persona que lo emite ni tampoco ha sido aportado por la Institución de donde supuestamente emanó, razón por la cual se objeta y observa por falta de autenticidad.

Que, se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo, y no existir antecedentes relativos a la falta de autenticidad alegada.

- Además, objetó el documento acompañado a folio 130, consistente en informe médico de fecha 14 de julio de 2014, por falta de autenticidad, pues contiene una firma ilegible, su supuesto autor no lo ha reconocido en juicio ni tampoco se tiene conocimiento sobre la veracidad de su contenido, por lo que carece de todo valor probatorio.

Que se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo, y no existir antecedentes relativos a la falta de autenticidad alegada.

- Que, de igual forma, objetó los documentos acompañados a folio 131, consistente en 5 fotografías relativas al accidente sufrido por don David Villalobos, el cual no ha sido reconocido en juicio, indica que se tratan de fotocopias de fotocopias, ignora si las leyendas que aparecen en el documento fueran de autoría de don Jonathan Vera González, como también se ignora qué persona habría tomado tales fotografías, o si existen más fotografías en la misma fijación fotográfica. Agrega, que el documento y su contenido arroja importantes dudas sobre su autenticidad, por lo que se objeta y observa por tales razones, solicitando se le niegue todo valor probatorio, pues afectaría el debido proceso, al impedir que su parte pueda cuestionar su contenido a través de un interrogatorio a la persona que habría confeccionado tal set fotográfico.

Que, considerando que la objeción formulada se fundamenta en que los documentos presentan dudas sobre su autenticidad, y no existiendo antecedentes fehacientes que justifiquen dicha objeción, **se negará lugar a la misma.**

- Que, objetó el documento acompañado a folio 133, consistente en una cédula de identidad, por falta de autenticidad, pues no tiene ningún atestado que indique que se trata de una copia autorizada y que la misma es íntegra.

Que se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo, y no existir antecedentes relativos a la falta de autenticidad alegada.

- Que, objetó el documento acompañado a folio 134, por falta de autenticidad, pues se trata de simples fotocopias. Agrega, que aparecen firmas distintas del supuesto empleador, y asimismo son ilegibles. Expresa que el documento es de mala calidad, por lo que ningún valor probatorio se le puede asignar.



Que se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo, y no existir antecedentes relativos a la falta de autenticidad alegada.

- Que, en cuanto a la objeción de folio 134, consistente en la liquidación de remuneraciones, expresa que la misma no aparece suscrita por ninguna persona, razón por la cual no se puede dar certeza a su contenido ni tampoco ha sido reconocido en juicio ni solicitado la exhibición de un documento de esas características.

Que se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo.

- Que, en cuanto al documento acompañado a folio 135, consistente en parte policial N° 00044 se objetó por falta de autenticidad y de integridad, pues se trata de una simple fotocopia respecto de la cual faltan los anexos que ella se indican. Que, no contiene atestado de ser copia del original, ni tampoco existe hasta al momento documento oficial de comparación como es aquel que la propia institución de Carabineros de Chile puede enviar al Tribunal.

Que, considerando que la objeción formulada se fundamenta en que el documento presenta dudas sobre su autenticidad e integridad, y no existiendo antecedentes fehacientes que justifiquen dicha objeción, **se negará lugar a la misma.**

- Que, además, objetó el documento acompañado a folio 136, consistente en una serie de documentos no ofrecidos en dicha presentación y en especial tres informes técnicos, a saber, N° 36-A-2014, N° 09-B-2013 y N° 21-B-2014, ya acompañados en el folio 128. Sobre estos documentos cabe objetarlos y observarlos por ser fotocopias simples que afectan su autenticidad, mismos documentos que no han sido reconocidos en juicio por quienes supuestamente los emitieron.

Que se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo.

- Que, objeta el documento acompañado a folio 138, consistentes en fotocopia de demanda, contestación, réplica, sentencia definitiva de primera instancia, recurso de casación y apelación, sentencia de segunda instancia y transacción, se objetan y observan tales documentos haciendo presente que ninguno de ellos contiene atestado alguno de ser copias de su original, razón por la cual están afectados por falta de autenticidad.

Que se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo, y no existir antecedentes relativos a la falta de autenticidad alegada.

- Que con fecha 4 de julio de 2019 la parte demandada objetó el documento consistente en Informe técnico de investigación del accidente 36-A-2014 conforme a los argumentos que pasa a señalar, por falta de integridad y autenticidad, pues tal documento no cuenta con certificación alguna del Ministerio Público respecto de su autenticidad como de su integridad. Expresa que el documento, ya individualizado, no ha sido reconocido por quienes aparecen supuestamente suscribiéndolos ni tampoco por el Ministerio Público, no existiendo antecedentes que den cuenta de su autenticidad.

Que se **negará lugar** a la presente objeción por considerar que sus alegaciones dicen relación con aspectos de fondo que serán considerados al resolver el presente fallo, y no existir antecedentes relativos a la falta de autenticidad alegada.

**Que con fecha 22 de julio de 2019, la parte demandada objetó los documentos acompañados por la contraria en folio 189 y 190. Expresa que,**



los documentos acompañados en el folio 189, dicen relación con un juicio en el que las partes son distintas a las de autos y que aparentemente terminó por una transacción en la que no se reconoce responsabilidad alguna. Agrega, que el documento acompañado bajo el folio 190, la parte demandada no reconoce ni admite responsabilidad alguna, cuestión que demuestra aún más que los documentos que se acompañan en los folios 189 y 190 de autos, en nada pueden aportar a la existencia de responsabilidad de su representada. Señala, que los documentos, ya referidos, no han sido reconocidos por quienes aparecen suscribiéndolos, ni tampoco han sido citados a juicio para su reconocimiento.

Que, considerando que la objeción formulada se fundamenta en que el documento en nada puede aportar a la existencia de responsabilidad de la demandada y no existiendo antecedentes fehacientes que justifiquen dicha objeción, **se negará lugar a la misma.**

## II.- EN CUANTO A LA TACHA:

Con fecha 12 de junio de 2019, la parte demandante viene en formular tacha respecto del testigo don **Jorge Felipe Carvajal Carvajal**, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, por tener una relación directa con la empresa TAD SpA.

Que, la parte demandada solicita el rechazo de la tacha deducida por la contraria, toda vez que tal como consta en autos la demandada no solamente es TAD SpA sino que otras seis personas naturales más, y respecto de estas seis personas naturales la demandante no establece en sus preguntas de tacha el vínculo que podría o no mantener con aquellas personas naturales, razón por la cual el testimonio de don Jorge Carvajal Carvajal resulta total y absolutamente válido, pertinente y hábil pues respecto de dichos demandados a los cuales representa como personas naturales también don Jorge Carvajal declara respecto de dichos demandados.

Que se **negará lugar a la tacha formulada**, por estimar que con el mérito de la declaración de la testigo, no se encuentra probada la causal de inhabilidad invocada.

## III.- EN CUANTO AL FONDO:

**Primero:** Que, con fecha 27 de febrero de 2018, comparece don **Eduardo Alberto Contreras Lagos**, abogado, domiciliado en calle Aníbal Pinto N° 509, oficina 302, comuna de Concepción, en representación según se acreditará de doña **Paola Roxana Parra Contreras**, cédula nacional de identidad N° 13.379.579-0, viuda, técnico en educación parvularia y de **Emilia Belén Villalobos Parra**, cédula nacional de identidad N° 23.856.923-0, pre-escolar, menor de edad, representada por su madre recién individualizada, ambas domiciliadas en Pasaje Las Dalías, casa 1954, Villa Manquimávida, comuna de Chiguayante, quien en la representación que inviste viene en deducir **demanda de indemnización de perjuicios** en juicio ordinario en contra de **TAD SpA**, giro transporte de carga, Rut N° 76.412.470-7, representada por don Fernando Ramón Díaz Contreras, cédula nacional de identidad N° 12.627.604-4 y/o don Jaime Roberto Vilajuana Rigau, cédula nacional de identidad N° 6.817.160-1, todos domiciliados en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón, en su calidad de continuadora legal de la empresa de **Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad limitada E.I.R.L.**, del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, en su calidad de mero tenedor del vehículo Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY92-2; y solidariamente y/o subsidiariamente y/o simplemente conjunta, según en derecho corresponda, en contra



de doña **María Silvia del Rosario Contreras Romo**, cédula nacional de identidad N° 5.718.830-8, dueña de casa, viuda, mayor de edad, domiciliada en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o en calle Marcel Duhaut N° 2890, comuna de Providencia y/o Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; de don **Marcelo Antonio Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 10.746.151-5, factor de comercio, casado, mayor de edad, domiciliado en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o Avda. Alejandro Galaz N° 1100, comuna de Casablanca y/o en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; de don **Fernando Ramón Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 12.627.604-4, factor de comercio, casado, mayor de edad, domiciliado en calle Chacabuco N° 219, comuna de Casablanca y/o en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; de don **Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 13.025536-1, factor de comercio, casado, mayor de edad, domiciliado en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; y doña **Sylvia Valericia Díaz Contreras**, cédula nacional de identidad N° 13.766.222-1, factor de comercio, casada, mayor de edad, domiciliada en General Oscar Bonilla N° 537, Villa Gabriela Mistral, comuna de Casablanca y/o en Avda. Alejandro Galaz N° 1110, comuna de Casablanca y/o en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón; estos últimos en su calidad de herederos y a prorrata de sus cuotas hereditarias en la sucesión del causante don **Alberto Ramón Díaz Parraguez**, cédula de identidad N° 5.237.035-3, quien era propietario del Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3.

Expresa, que el día miércoles 27 de marzo del año 2014, siendo aproximadamente las 2:00 de la madrugada el cónyuge y padre de sus representadas respectivamente, don **David Antonio Villalobos Rivera**, cédula de identidad N° 13.376.582-4, prevencionista de Riesgo, 36 años de edad a dicha fecha y mismo domicilio que sus representadas, recibió una llamada de su jefe directo quien le solicitaba presentarse inmediatamente a su trabajo en la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. para efectuar un procedimiento de evaluación de “conducción vigilada”. El procedimiento de “conducción vigilada” consiste en ir evaluando al conductor de un camión durante la conducción del transporte de carga. Agrega, que la empresa en que trabajaba el Sr. Villalobos, esto es, Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L., se dedica al transporte de carga peligrosa (combustible) para terceros (Petrobras). Que el transporte de esta carga se efectúa en tractos camiones que a su vez se conectan o enganchan a semirremolques en el que se encuentran los estanques que llevan en su interior el combustible que se transporta.

Expone, que don David Villalobos Rivera era el prevencionista de Riesgo de la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. y se encargaba de toda la zona sur donde operaba la empresa por lo que era común que lo llamaran a diversas horas para pedirle que se presentare de inmediato a la empresa. Que el Sr. Villalobos había sido contratado el 04 de septiembre del año 2006, es decir, tenía 7 años y 6 meses de antigüedad en dicha empresa a la época de su muerte y percibía una remuneración imponible mensual de \$770.000.- pesos, y era considerado un trabajador modelo, muy querido por sus compañeros y empleadores. Que, al recibir





el llamado de su jefe rápidamente se levantó de su cama, se despidió de su mujer y salió de su domicilio rumbo a la empresa ubicada en la comuna de Talcahuano. Refiere que al llegar a la empresa se le informó que efectuaría un procedimiento de evaluación de “conducción vigilada” al conductor Sr. José Luis Saldivia Opazo, cédula nacional de identidad N° 11.569.872-9, quien conduciría el Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY 92-2 cuyo mero tenedor era Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. que llevaría el combustible en el Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3, de propiedad de Alberto Ramón Díaz Parraguez. Agrega, que la carga se transportaría desde la comuna de Talcahuano a la comuna de Lumaco en la Novena Región del país.

Que, cerca de las 07 am del día 27 de marzo de 2014 el cónyuge y padre de sus representadas subió al Tractocamión y se dirigió junto al conductor a la comuna de Lumaco, transportando gran cantidad de combustible. Señala, que cerca de las 9:45 am de ese día 27 de marzo, en la Ruta CH-90 que une las localidades de Traiguén y Lumaco, entre los 2.573,00 metros y los 2.593,00 metros al sur, sur oriente de la Ruta 42, comuna de Lumaco, mientras los vehículos conducidos por don José Luis Saldivia Opazo transitaban por el costado derecho de la calzada demarcada de la Ruta CH-90, en dirección al nor poniente, a una velocidad establecida técnicamente de 83 km/hr, en una zona restringida y demarcada para máximo 30 km/hr, el conductor, don José Saldivia perdió el control de los mismos producto a su gran velocidad y a la mala utilización de los frenos y se volcaron impactando a la retroexcavadora, placa patente CCRC-98, operada por don Gabriel David Robles Bizama quien se encontraba trabajando en un terreno particular adyacente a la berma del camino.

Que, producto del impacto fallecieron el conductor del tractocamión y semirremolque Sr. José Luis Saldivia Opazo; el copiloto del tractocamión y semirremolque Sr. David Antonio Villalobos Rivera; y el operador de la retroexcavadora Sr. Gabriel David Robles Bizama.

Refiere, que la dinámica y causa basal del accidente se encuentra establecida en el Informe Técnico Reservado N° 36-A-2014 elaborada por la Subcomisaria de Investigaciones de Accidentes de Tránsito y Carreteras de Cautín (N° 22) de fecha 25 de julio de 2014 ordenado confeccionar por la Fiscalía Local de Traiguén en investigación sobre cuasidelito de homicidio, seguido ante el Juzgado de Letras de Traiguén, RIT N° 276-2014 y RUC N° 1400308529-6, el cual fue sobreseído por el fallecimiento del investigado. Dicho informe determinó que la dinámica y causa basal del accidente de autos fue la siguiente: “El participante (1) (conductor tractocamión y semirremolque Sr. Saldivia), conducía el móvil (1) (tractocamión) traccionando el móvil (1A) (semirremolque) por el costado derecho la calzada demarcada de la Ruta CH-90, en dirección al nor poniente, a una velocidad establecida técnicamente en 83 km/hr, lo que constituye exceso de velocidad en zona restringida y debidamente demarcada en 30 km/hr.

Que, el participante (2) (operador de la retroexcavadora Sr. Robles) permanecía con el móvil en un terreno irregular adyacente al costado nor oriente de la vía, direccionado al nor poniente. Que, en las condiciones antes descritas, el participante (1) debido al uso inadecuado del sistema de frenos producto del exceso de frenaje en una pendiente descendente, generó la cristalización del sistema y la nula respuesta ante su requerimiento, por lo que al desplazarse por el desarrollo de una curva a la izquierda perdió el control y maniobrabilidad de los móviles, traspasando con parte de las estructuras de éstos el eje de la calzada demarcado



con doble línea continua, instante en el cual perdió la longitudinalidad de su desplazamiento, volcando en  $\frac{1}{4}$  de vuelta sobre el lateral derecho. Que, ocurrido lo anterior, con posterioridad al volcamiento el tracto camión y semirremolque dieron inicio a un desplazamiento de proceso de arrastre en dirección al Nor Poniente, instantes en el cual giraron desde sus partes posteriores hacia la derecha describiendo un ángulo de  $45^\circ$  aproximadamente, ingresando con la totalidad de sus estructuras a la berma y luego a un terreno irregular en profundidad adyacente Nor Oriente de la Ruta CH-90, trayecto en el cual impactó simultáneamente con el tercio posterior del lateral derecho de la estructura del móvil (1) y con el tercio anterior del lateral derecho y parte frontal del móvil (1A), en la parte posterior de la estructura del móvil (2).

Que, el móvil 2 producto de la fuerza del impacto de los móviles (1) y (1A), fue proyectado en dirección Nor Poniente, instante en el cual perdió la verticalidad de su desplazamiento, volcando en una cantidad de vueltas no determinadas, dando posteriormente inicio a un desplazamiento en proceso de arrastre en dirección al mismo cardinal anteriormente señalado, deteniéndose”.

Que, producto del accidente falleció, entre otros, el cónyuge y padre de sus representadas, respectivamente, don David Antonio Villalobos Rivera, la causa de muerte de acuerdo al certificado de defunción fue un traumatismo encefálico craneano abierto con pérdida de masa encefálica/accidente de tránsito.

Aduce, que la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L., del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, fue transformada mediante escritura pública de fecha 24 de febrero del año 2016 extendida en la Notaría de Viña del Mar de don Luis Fisher Yavar, en una sociedad por acciones denominada TAD SpA, giro transporte de carga, Rut N° 76.412.470-7, publicándose el extracto de transformación en el Diario Oficial N° 41412 de fecha 19 de marzo del año 2016 e inscrito a fojas 108 N° 100 del Registro de Comercio del Conservador de Casablanca correspondiente al año 2016 y a fojas 59 N° 37 del Registro de Comercio del Conservador de Concón correspondiente al año 2016, siendo para todos los efectos legales su continuadora.

Agrega, que don Alberto Ramón Díaz Parraguez, cédula de identidad N° 5.237.035-3, falleció con fecha 18 de octubre del año 2016, siendo su sucesión intestada y concedida mediante Resolución Exenta N° 26758 de fecha 29 de noviembre de 2016 dictada por el Director Regional del Registro Civil de Valparaíso e inscrita bajo el N° 69475 del Registro Nacional de Posesiones Efectivas del año 2016, siendo sus herederos: a) María Silvia del Rosario Contreras Romo, ya individualizada, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante; b) Marcelo Antonio Díaz Contreras, ya individualizado, en su calidad de hijo del causante; c) Fernando Ramón Díaz Contreras, ya individualizado, en su calidad de hijo del causante; d) Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras, ya individualizado, en su calidad de hijo del causante y e) Sylvia Valericia Díaz Contreras, ya individualizada, en su calidad de hija del causante.

Que, producto del accidente de autos que terminó con el fallecimiento de don David Antonio Villalobos Rivera, cónyuge y padre de sus representadas respectivamente estas sufrieron los siguientes daños:

Que, en cuanto al daño patrimonial. Indica, respecto al lucro cesante, que el cónyuge y padre de sus representadas, esto es, el Sr. David Antonio Villalobos Rivera tenía 36 años de edad y tenía el título profesional de Prevencionista de Riesgo. Agrega, que ingresó a trabajar a la Empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L el 04 de septiembre del año 2006, o sea, tenía 7 años y seis



meses prestando servicios continuos en dicha empresa. Que, era considerado un modelo de trabajador, responsable, honesto, solidario, entre otras numerosas virtudes.

Que, de conformidad a sus cotizaciones previsionales durante los últimos seis meses de trabajo el Sr. Villalobos percibió una remuneración mensual de \$780.000.- pesos aproximadamente. Agrega, que, si se considera que el Sr. Villalobos era un buen trabajador dentro de su empresa se puede afirmar que de no haber fallecido y haber alcanzado su jubilación a los 65 años, el Sr. Villalobos hubiere trabajado otros 29 años percibiendo por concepto de remuneración anual la suma de \$9.360.000.- pesos, por lo que debido a la muerte del Sr. Villalobos éste y su familia dejaron de percibir la suma de \$271.440.000.- pesos.

Que, respecto al daño moral, indica que la doctrina y jurisprudencia señalan que el perjuicio material es el perjuicio patrimonial, y el perjuicio moral es el perjuicio extrapatrimonial, el “no económico”. Que, este último es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad humana, en último término todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño por ser consecuencia de la lesión de un derecho, se impone al autor la obligación de reparar. (Rodríguez Grez, Pablo. “Responsabilidad extracontractual” pag., 295 y siguientes).

Que, doña Paola Parra contrajo matrimonio con don David Villalobos, el día 05 de noviembre del año 2011 luego de varios años de pololeo. Indica, que aproximadamente en el año 2012 compraron una casa en la comuna de Chiguayante a la que se fueron a vivir junto a su hija recién nacida, Emilia Belén Villalobos Parra. En sus votos matrimoniales juraron amarse, respetarse, ayudarse económicamente, en la salud y la enfermedad hasta que la muerte los separase.

Aduce, que la vida familiar y personal se vio truncada violentamente con la muerte de su cónyuge don David Antonio Villalobos Rivera producto del accidente de autos, toda vez que ello le ha causado un profundo dolor físico y psicológico, y que a la fecha aún no ha podido recuperarse emocionalmente de la pérdida de su cónyuge. Tiene constantes pesadillas, no puede dormir, toda su vida se vio desmoronada con la muerte del Sr. Villalobos y los proyectos que tenían juntos jamás podrán concretarlos, sufriendo un fuerte trastorno depresivo.

Que, por ello el monto solicitado por concepto indemnización de daño moral a su favor asciende a \$300.000.000.- trescientos millones de pesos.

Indica, respecto a su representada Emilia Belén, que nació el día 26 de enero de 2012 producto del amor matrimonial que se profesaban don David Antonio Villalobos Rivera y doña Paola Roxana Parra. Agrega, que siempre fue muy apegada a su padre, era la hija única de ambos por lo que concentraba toda la atención de sus padres.

Que, su desarrollo fue armonioso e ideal para un menor ya que vivía con ambos padres recibiendo mucho amor y ternura de ellos. Señala, que al fallecer el Sr. Villalobos, perdió a su padre el cual jamás podrá ser reemplazado por otro, crecerá sin su figura paterna ya que no tiene abuelos varones o tíos que pudiesen acompañarla y/o apoyarla. Que, la muerte de su padre ha significado para ella un profundo daño físico y psicológico, que repercutirá no sólo en su proceso de crecimiento sino durante toda su vida.

Que, por ello el monto solicitado por concepto indemnización de daño moral a su favor asciende a \$400.000.000.- cuatrocientos millones de pesos.

Que, la responsabilidad civil de acuerdo a la legislación, es la que proviene de un hecho o una omisión que causa daño a otro, su efecto es precisamente



reparar ese daño causado; y no persigue el castigo del culpable sino obtener la reparación del perjuicio sufrido.

Añade, que la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Será responsabilidad extracontractual aquella en que la obligación de indemnizar surge de un delito o cuasidelito civil. Lo que caracteriza esencialmente al delito y cuasidelito civil es el hecho de inferir injuria o daño a otra persona. El Código Civil es bien explícito al respecto: a) El artículo 1437 expresa que las obligaciones nacen ya a consecuencia de un hecho que haya inferido injuria o daño a otra, como en los delitos y cuasidelitos; b) El artículo 2284 señala que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización.

Que, en autos se trata de indemnizar el daño derivado de la responsabilidad extracontractual generado a causa de un accidente de tránsito, razón por la cual, también deberán considerarse las normas pertinentes de la Ley 18.290 sobre Tránsito. Señala, que de los artículos 2284, 2314 y siguientes del Código Civil se desprende que para que un hecho genere responsabilidad extracontractual, es necesario que estén presentes los siguientes elementos: 1) Que su autor sea capaz de delito o cuasidelito. 2) Que ese hecho (acción u omisión) provenga de dolo o culpa. 3) Que cause un daño. 4) Relación de causalidad entre el hecho doloso o culpable y el daño causado.

Que, en cuanto a la capacidad delictual y/o cuasidelictual. Aduce, que sólo son incapaces los que carecen del discernimiento necesario para darse cuenta del acto que ejecutan, y que enumera el artículo 2319 del Código Civil: “no son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años ni los dementes”, “Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de dieciséis años ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior.”

Añade, que tanto el conductor del vehículo, como los demandados de autos no se encuentran dentro de las excepciones contempladas en el artículo anteriormente señalado.

Que, en cuanto al dolo y la culpa. Refiere, que para que un hecho que dañe a otro genere responsabilidad extracontractual, no basta que su autor sea capaz de delito o cuasidelito, es indispensable que haya sido ejecutado con dolo o culpa. Por su parte, la culpa ha sido definida por el Código Civil en el artículo 44. Aunque las definiciones que da se refieren más bien a la culpa contractual por ser la única que admite graduación, son aplicables igualmente en materia de delitos y cuasidelitos.

Que, de esas definiciones se desprende que la culpa es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y negocios propios. La culpa, según esto, es un error de conducta, supone descuido, imprudencia, negligencia, falta de precaución, omisión de los cuidados que la prudencia requiere o hace necesarios, sin que sea de rigor que haya una infracción reglamentaria. En otros términos, hay culpa cuando no se obra como se debiere.

Que, la responsabilidad de los demandados deriva de lo establecido en la Ley del Tránsito N<sup>o</sup> 18.290, toda vez, que de acuerdo a los hechos relatados en la presente demanda, el Sr. José Luis Saldivia Opazo, iba conduciendo el tractocamión y semirremolque, por el costado derecho de la calzada demarcada de la Ruta CH-90, en dirección al nor nor poniente, a una velocidad establecida técnicamente de 83 km/hr, en una zona restringida y demarcada para máximo 30 km/hr, perdiendo el control de los móviles producto a su gran velocidad y a la



mala utilización de los frenos, volcándose los móviles e impactando a la retroexcavadora, placa patente CCRC-98, operada por don Gabriel David Robles Bizama quien se encontraba trabajando en un terreno particular adyacente a la berma del camino. Producto a ello fallecieron todos los involucrados en el hecho.

Arguye, que el conductor Sr. Saldivia infringió, entre otras, las siguientes normas de la Ley del Tránsito N° 18.290. El artículo 108 que dispone que todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento. Asimismo, el artículo 165 en cuanto estatuye que toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan.

Que, existen ciertas presunciones de responsabilidad en contra del conductor Sr. Saldivia, contempladas en el artículo 167 de la Ley N° 18.290 sobre Tránsito que prescribe que en los accidentes del tránsito, constituyen presunción de responsabilidad del conductor, los siguientes casos: 2.- No estar atento a las condiciones del tránsito del momento; 7.- Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable o prudente, según lo establecido en el artículo 144.

Expone, que a raíz de lo expuesto la apreciación de la conducta del autor del daño es innecesaria si éste proviene de la violación de una obligación determinada impuesta por la ley o un reglamento, en este caso la Ley del Tránsito, constituyéndose lo que se denomina culpa contra la legalidad. Que, se habla de culpa contra la legalidad para referirse a los casos en que una determinada actividad se encuentra reglada por el legislador, precisamente para evitar la producción de algún daño.

Que, la responsabilidad de los demandados deriva de lo establecido en el artículo 169 de la Ley N° 18.290, que señala en su inciso segundo que el conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente. Asimismo, el inciso sexto del mismo artículo preceptúa que la responsabilidad civil del propietario del vehículo será de cargo del arrendatario del mismo cuando el contrato de arrendamiento sea con opción de compra e irrevocable y cuya inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados haya sido solicitada con anterioridad al accidente. En todo caso, el afectado podrá ejercer sus derechos sobre el vehículo arrendado.

Que, la Ley del Tránsito define vehículo como el medio con el cual, sobre el cual o por el cual toda persona u objeto puede ser transportado por una vía, lo que permitiría advertir que para la Ley vehículo se predica no sólo del medio con o por el cual se transportan personas u objetos, sino también sobre el cual se transportan ellos, de forma tal que incluye claramente los acoplados que vayan adosados a un vehículo motorizado (Corte Suprema, rol 13.717-2013). Asimismo, define conductor como toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública, definición que pone de manifiesto el carácter unitario de un vehículo motorizado, no obstante los diversos elementos



estructurales móviles que en el caso sub judice lo compongan, más aún si su doble sistema de frenos era accionado desde el tractocamión.

Señala, que si bien el propietario del vehículo Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY 92-2, al momento del accidente de autos era el Banco Itau Chile, existe en el certificado de anotaciones vigentes de dicho vehículo, una limitación al dominio que corresponde a la inscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra e irrevocable cuyo arrendatario era Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L., ya individualizado.

Que, en cuanto al daño, añade, que para que la acción u omisión, de una persona capaz de delito o cuasidelito engendre responsabilidad civil, no basta su ejecución con dolo o culpa, es indispensable que cause daño. Que, el daño de autos cumple todos los requisitos exigidos por la ley para ser considerado tal e indemnizable, a saber: a) Fue producido por una persona distinta de los ofendidos, o sea, de sus representadas. b) Evidentemente consiste en una perturbación o molestia anormal. c) Proviene de un actuar ilícito, cual es el actuar culpable (negligente e ilegal) del conductor del móvil. d) Consiste en la lesión de un interés legítimo, o sea el interés invocado por la víctima debe ser lícito o legítimo, esto es, conforme con la moral y las buenas costumbres. e) Es cierto, o sea, es real, efectivo, tanto que, a no mediar él, los ofendidos se habrían hallado en mejor situación. f) No se trata de un daño reparado.

Que, el daño debe ser reparado íntegramente, no hay que confundir la certeza del daño con la certeza de su monto, el lucro cesante debe ser reparado.

Que, en cuanto a la relación de causalidad o nexo causal, indica, que debe existir un nexo o relación inmediata, de causa a efecto, entre el acto o hecho del hombre (acción u omisión) y el evento o daño, de manera que se pueda inferir de ese nexo que el daño no se habría verificado sin aquel acto u omisión, el cual, debe ser premisa necesaria para verificación del daño.

Que, de esta manera, resulta evidente la existencia del nexo o relación de causalidad entre el actuar culposo del conductor del vehículo y los daños, patrimoniales y morales, irrogado a sus representadas. Que, si el Sr. Saldivia hubiere respetado el límite de velocidad y usado correctamente el sistema de frenos no se habría producido el accidente de autos.

**Que, en subsidio** y para el improbable caso que no se acoja la demanda de autos, viene en interponer **demanda de indemnización de perjuicios** en contra de **TAD SpA**, giro transporte de carga, Rut N° 76.412.470-7, representada por don Fernando Ramón Díaz Contreras, cédula nacional de identidad N° 12.627.604-4 y/o don Jaime Roberto Vilajuana Rigau, cédula nacional de identidad N° 6.817.160-1, todos domiciliados en Loteo Industrial Gulmue N° 23, comuna de Concón, en su calidad de continuadora legal de **Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad limitada E.I.R.L.**, del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, fundado en su responsabilidad extracontractual derivada de su condición de empleador del conductor del Tractocamión y semirremolque de autos Sr. José Luis Saldivia Opazo, cédula nacional de identidad N° 11.569.872-9, quien se desempeñaba, al momento del accidente, como empleado de la empresa de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L.

Indica, que el inciso cuarto del artículo 2320 del Código Civil señala expresamente que, así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso. Que, los hechos que



fundamentan la demanda subsidiaria son los mismos señalados precedentemente los que se dan por expresamente reproducidos. Agrega, que la responsabilidad de la demandada es extracontractual y se fundamenta en los artículos 2314 y 2320 inciso cuarto del Código Civil y demás normas pertinentes.

Que, el conductor del vehículo involucrado en el accidente era dependiente de la demandada y la causa del accidente consiste en que el Sr. Saldivia conducía a exceso de velocidad y utilizó mal los frenos del vehículo. Agrega, que el conductor no se encontraba del todo capacitado para conducir un vehículo de las características del involucrado en autos, cuestión que correspondía supervigilar al propio demandado.

Añade, que los daños sufridos por sus representadas y los montos que se demandan son los mismos señalados precedentemente el que se da por expresamente reproducido.

**Solicita, tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario** en contra TAD SpA, giro transporte de carga, Rut N° 76.412.470-7, representada por don **Fernando Ramón Díaz Contreras** y/o don **Jaime Roberto Vilajuana Rigau**, todos ya individualizados, en su calidad de continuadora legal de **Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.**, del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, quien era el mero tenedor del vehículo Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY 92-2; y solidariamente y/o subsidiariamente y/o simplemente conjunta, según en derecho corresponda de doña **María Silvia del Rosario Contreras Romo**; don **Marcelo Antonio Díaz Contreras**; de don **Fernando Ramón Díaz Contreras**; de don **Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras**; y doña **Sylvia Valericia Díaz Contreras**, todos ya individualizados, en su calidad de herederos y a prorrata de sus cuotas hereditarias en la sucesión del causante don **Alberto Ramón Díaz Parraguez**, cédula de identidad N° 5.237.035-3, quien era propietario del Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3, admitirla a tramitación, acogiendo la demanda de autos, y en definitiva declarar y condenarlos:

a) A pagar a doña Paola Roxana Contreras Parra y a Emilia Belén Villalobos Parra la suma de **\$271.440.000.-** por concepto de **daño lucro** cesante; de ser procedente, las sumas se pagarán debidamente reajustadas, según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor o el indicador que legalmente haga sus veces, entre la fecha del accidente de autos, y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. En subsidio para que sean condenados a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que con esa misma base se determine.

b) A pagar a doña Paola Roxana Parra Contreras la suma de **\$300.000.000.-** por concepto de **daño moral**; De ser procedente, las sumas se pagarán debidamente reajustadas, según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor o el indicador que legalmente haga sus veces, entre la fecha del accidente de autos, y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. En subsidio para que sean condenados a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que con esa misma base se determine.

c) A pagar a Emilia Belén Villalobos Parra la suma de **\$400.000.000.-** por concepto de **daño moral**. De ser procedente, las sumas se pagarán debidamente reajustadas, según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al



Consumidor o el indicador que legalmente haga sus veces, entre la fecha del accidente de autos, y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. En subsidio para que sean condenados a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que con esa misma base se determine.

d) Que se declare a los demandados, ya individualizados, solidariamente y/o subsidiariamente y/o simplemente conjunta, según en derecho corresponda, responsables de los daños y perjuicios señalados, en su calidad de propietario y mero tenedor del vehículo responsable del accidente en estos autos y, consecuentemente, se les condene al pago de las indemnizaciones solicitadas en esta presentación respecto de la totalidad de los actores, o en subsidio a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que se determine.

e) A pagar las costas de la causa.

**En subsidio** de lo anterior, y para el improbable caso que no se acoja la demanda de autos, **solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicio** en contra de TAD SpA, giro transporte de carga, Rut N° 76.412.470-7, representada por don **Fernando Ramón Díaz Contreras**, y/o don **Jaime Roberto Vilajuana Rigau**, todos ya individualizados, en su calidad de continuadora legal de **Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad limitada E.I.R.L.**, del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, fundado en su responsabilidad extracontractual derivada de su condición de empleador del conductor del Tractocamión y semirremolque de autos Sr. Sr. **José Luis Saldivia Opazo**, cédula nacional de identidad N° 11.569.872-9, quien se desempeñaba, al momento del accidente, como empleado de la empresa de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y según lo dispuesto en el artículo 2320 del Código Civil, acogerla a trámite y en todas sus partes, y en definitiva condenar a la demandada a pagar a sus representadas las indemnizaciones y sumas señaladas en las letras a, b y c precedentes las que se dan por expresamente reproducidas, todo ello con costas.

**Segundo:** Que, con fecha 9 de mayo de 2018, **la parte demandada** de TAD SpA y doña María Silvia Del Rosario Contreras Romo, don Marcelo Antonio Díaz Contreras, don Fernando Ramón Díaz Contreras, don Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras y doña Sylvia Valericia Díaz Contreras, **contestaron la demanda.**

Expone, que la demanda de autos, tanto la principal como la subsidiaria, se fundamenta en dos sistemas de atribución de responsabilidad extracontractual, el primero contenido en la Ley N° 18.290, que desarrolla en la culpa contra la legalidad y el segundo se sustenta en la responsabilidad civil del empresario por el hecho de sus dependientes.

En primer lugar, abordará la acción principal, para luego pasar a la acción subsidiaria.

**1.- Que, se atribuye responsabilidad civil extracontractual a su representada fundada en la Ley N° 18.290.**

Refiere, que sobre este tipo de responsabilidad se deben analizar diversos elementos para su procedencia. Que, el artículo 169 inciso 2° de la Ley 18.290 establece que el conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad con la legislación vigente.





Indica, que el primer asunto que interesa de ésta norma dice relación con la solidaridad y la transformación de la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada a una Sociedad por Acciones, toda vez que ambos tipos de empresas son esencialmente distintas, tanto por su estructura como por su composición, y se trata de empresas respecto de las cuales surgen diversos efectos.

Que, como lo señala la contraria, TAD SpA se ha constituido como continuadora legal de la primera, sin embargo, no es menos cierto que ésta transformación ha producido un efecto legal determinante. Que, así, conforme al artículo 1511 del Código Civil, la solidaridad es de derecho estricto, esto es, sólo puede surgir en virtud de la convención, del testamento y de la ley. Que la responsabilidad solidaria del artículo 169 de la Ley N° 18.290, queda establecida al momento de producirse el accidente que motiva dicha responsabilidad, además de cumplirse el resto de los requisitos legales, y en el caso de autos, a la época del accidente, tal solidaridad estaría dirigida al propietario o mero tenedor del vehículo involucrado en el accidente y al momento que se produce éste. Que, entonces cabe preguntarse si la solidaridad aludida se transmite a la nueva empresa en su calidad de continuadora legal de la misma.

Que, tratándose del instituto de la solidaridad, ésta de modo alguno se transmite, salvo su constitución por el acto del testamento, en los demás casos, la solidaridad no se transmite de ninguna forma. Agrega, que su representada no se puede ver afectada por la solidaridad, puesto que la ley no contempla que ésta exista en su continuadora legal. Que, el acto de transformación de una empresa individual de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones no ha sido considerado como una forma de subsistencia de la solidaridad, que este efecto o más bien ésta ausencia del efecto transmisor se puede encontrar en la misma invocación de la contraria. Que, el artículo 1523 del Código Civil prescribe que los herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porción hereditaria. Que, por su parte, el artículo 1093 del mismo cuerpo legal establece que los herederos representan a la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones, y la solución que entrega el legislador en casos de continuación legal de una persona, transforma la solidaridad en una obligación conjunta.

Señala, que el mismo efecto debe predicarse respecto de su representada TAD SpA, puesto que la empresa que a la época del accidente tenía existencia legal, era sin duda respecto de la cual debía propugnarse la solidaridad. Que, al desaparecer la empresa individual de responsabilidad limitada, transformándose en una sociedad por acciones, no ha tenido la virtud de transmitir la solidaridad, la primera, respecto de la segunda. Que, siendo así las cosas y considerando la fuerza de derecho estricto de la solidaridad, ésta no se puede invocar en relación a TAD SpA.

Que, TAD SpA sólo puede comparecer como una eventual deudora conjunta, cuestión que trae como efecto, que los montos demandados, necesariamente deben distribuirse, según el número de responsables llamados por la ley, en consecuencia la mancomunidad es la regla general.

Indica, que las normas que establecen la solidaridad deben interpretarse restrictivamente por ser de derecho estricto, conforme a la mancomunidad como regla general, no se puede hacer responsable en su totalidad a su representada respecto de una responsabilidad que también compete al supuesto autor del daño, quien también se erige como responsable de los daños conforme al citado artículo



169 de la Ley 18.290. Agrega, que atribuir toda la responsabilidad a su representada sin ningún tipo de solidaridad legal que lo respalde representa una exclusión de responsabilidad del conductor que en éste caso se ve representado por sus herederos, cuestión que reafirma en definitiva que la obligación que se persigue es única y solamente conjunta, razón por la cual su representada y para el caso improbable de ser condenada, no puede de modo alguno soportar toda la carga indemnizatoria que se persigue.

Señala, que la acción ejercida en contra de TAD SpA, no indica si ésta se ejerce en virtud de la solidaridad que establece la ley o bien lo hace en virtud de una obligación mancomunada.

Añade, que los efectos de una y otra son diversos y un ejemplo de ello dice relación con la acción subsidiaria que deduce, pues en ella se invoca la responsabilidad o doctrina de la “culpa in eligendo y el vigilando”, que en ningún caso resulta solidaria. Que, en ese caso, el empresario respondería por su propia culpa en un sistema de responsabilidad por el hecho ajeno (prueba liberatoria). Que esta falta de determinación constituye una razón más para el rechazo de la demanda de autos por falta de determinación en la acción entablada.

Que, debe rechazarse en todas sus partes la demanda de autos fundada en la solidaridad, sin perjuicio de la exoneración total que desde ya invoca respecto de la responsabilidad que se intenta imponer.

Que, se debe poner atención en el inciso 6° del mismo artículo 169 de la Ley 18.290, que señala: “la responsabilidad civil del propietario del vehículo será de cargo del arrendatario del mismo cuando el contrato de arrendamiento sea con opción de compra e irrevocable y cuya inscripción en el registro de vehículos motorizados haya sido solicitada con anterioridad al accidente. En todo caso, el afectado podrá ejercer sus derechos sobre el vehículo arrendado.”

Que, en cuanto al arrendamiento del vehículo y falta de legitimación pasiva, este tema no ha sido indiferente para el legislador, pues en el país ha surgido la industria del arrendamiento generando la formación de un interés empresarial en el arrendamiento de vehículos con opción de compra. Que, este interés permite que el empresario del arrendamiento ponga sobre sus hombros un grado de responsabilidad por la explotación de vehículos a través de contratos de arrendamiento con opción de compra que hoy se denomina leasing. Que, la empresa de leasing es un arrendador profesional y en ese sentido la cesión del uso del vehículo a otro supone un reconocimiento de la idoneidad para la conducción o manejo y al prestar su consentimiento para ello queda vinculado a las consecuencias de su uso. Que, la contrapartida de ésta responsabilidad es el beneficio o lucro que obtiene con la operación de leasing, por ello que para eximirse de responsabilidad, la ley exige los requisitos anotados en el inciso 6° de la norma del artículo 169 de la tantas veces citada ley.

Que, el empresario del leasing participa del riesgo de la industria del tráfico rodado, es que su responsabilidad no ha sido excluida de un accidente de tránsito, por ello, el arrendatario del vehículo sólo será responsable de los daños que se ocasionen con el vehículo arrendado, cuando éste o su tenencia cumpla con los requisitos a que alude el inciso 6° del artículo 169 de la Ley de Tránsito, por lo que el arrendatario se ve excluido de responsabilidad civil, asumiendo ésta el propietario, cuando no se cumplen las exigencias de la norma referida. Que, por lo anterior, para dirigirse en contra de su representada, se debe acreditar que el vehículo se entregó en arrendamiento con opción de compra, en forma irrevocable y cuya inscripción en el registro de vehículos motorizados se haya solicitado con antelación al accidente, en caso contrario, responde el propietario del vehículo.



Que, el propietario sólo puede eximirse de responsabilidad si ha dado cumplimiento a las exigencias del mencionado inciso 6° del artículo 169. Que por el contrario, si el propietario del vehículo no ha dado cumplimiento a tales exigencias, entonces éste será el responsable, liberando de toda responsabilidad al arrendatario, pues si bien el inciso 2° del artículo 169, impone la responsabilidad solidaria al conductor, al propietario y al mero tenedor, acto seguido exime de dicha responsabilidad al propietario haciéndola recaer exclusivamente en el arrendatario. Que por esa razón, el efecto inverso, es que si el propietario no da cumplimiento a los presupuestos de su irresponsabilidad civil, entonces éste será plenamente responsable de los daños, excluyendo al arrendatario en aplicación de la misma regla contemplada para el propietario.

Que, por lo anterior, su representada no tiene legitimación pasiva para ser demandada, puesto que de los antecedentes que fluyen de la demanda, se observa que en la especie no se dan todos y cada uno de los requisitos del artículo 169 inciso 6° de la Ley N° 18.290, el actor debió dirigir su acción en contra del propietario del vehículo, pues su representada ni su antecesora aparecen como sujetos pasivos de la acción de autos, por no cumplirse los requisitos exigidos por la ley.

Que, el actor ha invocado el régimen de responsabilidad de la Ley N° 18.290, haciéndola aparecer como responsabilidad estricta de la empresa a todo evento. Sin embargo, eso no es así, pues el legislador no exime al actor de probar todos los elementos que hacen surgir la responsabilidad civil extracontractual. Que, la conducta del autor del daño requiere ser apreciada y más aún resulta necesaria dicha apreciación, puesto que aun existiendo una obligación de cuidado impuesta por la ley o el reglamento, aquello no determina per sé la responsabilidad civil, como lo sostiene al demandante. La mera infracción de una norma de la ley de tránsito no establece a todo evento la responsabilidad del autor del daño, ya que es necesario para el nacimiento de responsabilidad por dicha infracción, ésta debe estar en relación de causa a efecto.

Que, en cuanto al exceso de velocidad. Refiere, que se ha invocado por la demandante como elemento indiscutible de acreditación de la velocidad del móvil, el informe técnico 36-a-2014.- Que, sobre éste informe, señala el deficiente desarrollo y la absoluta falta de fundamentos técnicos del mismo, toda vez que no se expone de manera alguna y fundado en elementos reveladores que efectivamente el conductor al momento del impacto conducía a exceso de velocidad, como tampoco se establece de modo alguno la zona de restricción de velocidad. Agrega, que al mismo tiempo, al constituir dicho informe uno de carácter pericial, éste debe ser sometido al escrutinio de su parte, en función del principio de bilateralidad de la audiencia, puesto que como medio de prueba, debe permitir a su parte indagar sobre una multiplicidad de aspectos oscuros del mismo.

Refiere, que una primera duda que arroja el informe aludido, es que la velocidad se establece a partir de un tacógrafo digital, el cual es adicional al que posee el tracto camión. Así es, dicho tacógrafo es instalado como medida de control de velocidad de los viajes y para el control de las horas de conducción del conductor, estableciendo y registrando cada cierto tiempo la velocidad que el conductor ha dado al vehículo. Así, la velocidad obtenida de ese tacógrafo no corresponde a la velocidad que llevaba el móvil al momento del impacto, pues la misma es tomada por el instrumento en forma intermitente, ya sea cada 10 o 15 minutos. Este tacógrafo digital es instalado en el vehículo y cumple una función de control en los aspectos mencionados, incluso permite establecer la jornada de trabajo del conductor. Adicional a este tacógrafo, el propio camión trae de fábrica



un odómetro, que es el velocímetro análogo que posee el vehículo, es decir, se trata de un marcador de velocidad, que en el informe invocado ni siquiera aparece aludido ni menos periciado. Normalmente en impactos o accidentes de ésta naturaleza, el odómetro pesquisa la velocidad al momento del impacto, cuestión que no ocurrió en el accidente de autos.

Que, por lo anterior, fundar un exceso de velocidad en un tacógrafo digital instalado por la empresa o a petición de ésta y programado para registrar la velocidad en forma intermitente y otros antecedentes no resulta concluyente, más aun si el informante del que se valió el investigador o autor del informe, nunca mencionó que el camión venía a exceso de velocidad cuando lo observó unos instantes previos al accidente. Asimismo, el informe en cuestión no aparece suscrito por ningún experto, ya sea un ingeniero en tránsito o cualquier otro profesional adecuado para evacuar un informe de esa naturaleza, de allí que tal informe resulta total y absolutamente deficiente para establecer el pretendido exceso de velocidad.

Que, en cuanto a la cristalización del sistema de frenos. Expresa, que el conductor del tracto camión habría mal utilizado el sistema de frenos, aseveración que sólo demuestra la falta de antecedentes técnicos sobre el particular. La cristalización de frenos no sólo puede producirse por reiteradas acciones de frenaje, sino que también puede producirse frente a un evento único de frenaje, más aun cuando se trata de un vehículo de un considerable peso. Este punto tiene relevancia, pues los hechos se construyen, en parte, sobre la base de reiteradas acciones de frenaje, cuestión que permite entender los hechos desde otra dinámica. El informe técnico no se refiere a ésta posibilidad ni siquiera descartándola, lo que implica la falta de rigurosidad técnica del mismo, ya que una hipótesis distinta de frenaje, puede desembocar en una dinámica, también distinta, del accidente y alterar de esa forma la verdadera causa basal del accidente.

Que, asimismo, la continuidad en el frenaje puede responder a una técnica de experiencia para evitar el efecto tijera cuando un tracto camión lleva un carro de arrastre. Con esto se evita que el acoplado o semirremolque se desplace hacia los costados. Agrega, que pueden ser varias las razones que provoquen la cristalización de las balatas, pero todas ellas indican que los frenos se encuentran en buen estado.

Que, en el informe técnico invocado por el actor, si bien se refieren a la cristalización del sistema de frenos, igualmente no indica si se trata del sistema de frenos del tracto camión o del semirremolque.

Que, en cuanto a los daños. Aduce, que la demandante sobre este punto expresa que debido a la muerte del sr. Villalobos, tanto éste como su familia dejaron de percibir la suma de \$271.440.000.- lo primero que destaca es la confusión de la acción de indemnización por lucro cesante, pues si bien la indemnización de perjuicios por daño moral es una acción ejercida por daño reflejo o por rebote, esto implica que la misma está radicada en quienes sufrieron el daño, pero como acción personal y no por el daño sufrido por la víctima directa.

Añade, que distinta es la situación del lucro cesante, puesto que ésta deriva del patrimonio del causante y en ese sentido es la sucesión hereditaria, en su calidad de tal, la llamada a ejercer dicha acción, ya que el daño por lucro cesante o la pérdida de una ganancia legítima lo ha sufrido el fallecido. Que, no se trata de ganancias de la familia como asegura la contraria, puesto que los ingresos del causante ingresaban a su patrimonio y no a cada uno de los miembros de su familia, por lo que la familia no ha dejado de percibir nada y mal podría alegar lucro cesante.



Agrega, que al no haber ejercido la acción como sucesión hereditaria, las demandantes no tiene legitimación activa para demandar por éste concepto, puesto que no son ellas las que han dejado de percibir una ganancia, por lo que no pueden ejercer una acción a título personal, si ésta ni siquiera está en su patrimonio.

Arguye, que otra razón, para rechazar la demanda de autos por éste concepto, viene dado por el alto grado de indeterminación que plantea la contraria en relación al lucro cesante. Agrega, que el cálculo del lucro cesante es expuesto como una línea continua exenta de todo factor vivencial, de costos y ahorros, consideraciones tales como el gasto necesario para producir la renta, los impuestos que se dejan de pagar, el cambio de actividad, una probable invalidez, los beneficios que resultan del fallecimiento, seguros involucrados, separación de hecho, aunque suene como un cálculo frío, pero si se trata de reparación, estos factores concurren a efectos de establecer un daño de ésta naturaleza.

Que, esta indeterminación sobre este concepto, aunque se funde en un cálculo probabilístico, igualmente resulta demasiado incierto, más aun si se considera que el fundamento que se invoca para demandar el monto que pretende la contraria, es un fundamento lineal simple que considera un futuro muy extenso. Se reclama un daño que no es cierto, real y efectivo, ya que el mismo exige un mínimo de grado de probabilidad en la percepción de ingresos futuros. Sobre este tipo de daño se ha dicho que “para evaluar el lucro cesante deben proporcionarse antecedentes más o menos ciertos que permitan determinar una ganancia probable que dejó de percibirse a consecuencia del delito o cuasidelito.”

Que, en cuanto al daño moral reflejo o perjuicio de afección. Indica, que ha sido discutido profusamente tanto en el derecho nacional como en el comparado. Añade, que es discutida su procedencia, pero aceptada ésta, surge la discusión sobre los criterios que deben concurrir para su cuantificación. Este desacuerdo resulta natural e intuitivo, pues si bien es posible aceptar que la muerte de un ser querido produce dolor, no es menos cierto que diversos factores concurren a la hora de establecer su cuantificación.

Que, la indemnización de perjuicios por daño moral es de carácter reparatorio y en ese sentido cobra vigencia el concepto de proporcionalidad que debe evitar que la indemnización pase de ser una reparación a un enriquecimiento sin causa. De allí que deben entrar en consideración, por ejemplo, si la muerte de la víctima, ha producido el pago de otras indemnizaciones, como podría ser un seguro social, cuestión que determina el cúmulo de indemnizaciones. Agrega, que la indemnización por daño moral debe recoger y reconocer como satisfacción resarcitoria, el pago que reciben las víctimas por rebote por una vía distinta a la demanda de indemnización de perjuicios.

Expone, que otro factor reconocido y aplicado por la jurisprudencia dice relación con la exposición de la víctima al daño, ya sea por acción o una omisión. Que, los criterios de cuantificación del daño moral deben ceñirse al mérito de las probanzas rendidas y a otros criterios de determinación. La exorbitante suma de dinero que demanda el actor se aleja de lo que se puede entender como una reparación. Se ha dicho que “la indemnización por el daño moral reclamado no puede prestarse para especulaciones ni constituir fuente de enriquecimiento injusto.” En la especie, la abultada suma que se solicita debe tener un respaldo probatorio, que en ningún caso puede llegar a constituir un enriquecimiento, sino más bien una reparación.

Expresa, que en el caso improbable que se acoja la demanda de autos y deba determinar el quantum indemnizatorio, debe tener presente como criterio regulador, el hecho de si las demandantes reciben, han recibido o seguirán recibiendo alguna



indemnización fundado en el mismo hecho, esto es, en la muerte del sr. Villalobos. Señala, que deberá considerarse el pago efectuado, que se efectúa actualmente y que se seguirá pagando en el futuro.

Que, la muerte del sr. Villalobos ha activado el seguro por accidentes del trabajo, seguro que es financiado por el empleador y que actualmente a través del Instituto de Seguridad del Trabajo, organismo administrador de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo, se paga a las demandantes. El monto que reciben y seguirán recibiendo las demandantes tiene naturaleza indemnizatoria, razón por la cual, debe considerarse al momento de cuantificar la indemnización que por daño moral se pide por la contraria, toda vez que ambas indemnizaciones no son acumulables. Con esto, indica que el legislador busca evitar la especulación en este tipo de indemnizaciones, y aquello lo logra al otorgarle acción de reembolso a la administradora de la Ley N° 16.744.- en contra de quien resulte civilmente responsable, según lo establece el artículo 69 letra a) de la citada ley. Por eso hay que tener muy en cuenta estos pagos, ya que se puede producir un doble pago que permitiría un enriquecimiento injusto de los demandantes.

Que, la probable indemnización que pudieran tener las víctimas por repercusión, además de la reducción planteada en el punto anterior, también debe aplicarse una segunda reducción, por cierto previa a la anterior, fundada en el artículo 2330 del Código Civil.

Aduce, que para el caso que se estime que existe responsabilidad civil de su representada en los hechos por los cuales se ha accionado, debe sujetar a reducción la indemnización por daño moral, pues en ella se debe considerar la omisión del sr. Villalobos en el cumplimiento de sus funciones. Que, tal como lo ha señalado la contraria, el sr. Villalobos era prevencionista de riesgo y cumplía funciones laborales en ese ámbito, dentro de sus funciones específicas asignadas, era la de auditar la conducción en terreno, también denominada “conducción vigilada” que tiene por finalidad, recabar información sobre la conducción a la defensiva, respeto de normas de tránsito y otra serie de aspectos sobre la seguridad en la conducción de los camiones de la empresa. Consecuencia de lo anterior, es que el prevencionista de riesgo debe, en el marco de sus funciones, y en especial en el cumplimiento del cometido en la “conducción vigilada” controlar y advertir al conductor el cumplimiento irrestricto de las normas de seguridad asociadas a la conducción.

Indica, que, si la contraria imputa al conductor del camión siniestrado, exceso de velocidad en zona restringida, entonces tal exceso de velocidad debió ser advertido por el sr. Villalobos al conductor, sr. Saldivia, evitando que ésta infracción se produjera. Para eso se ha implementado ésta auditoría en la conducción o conducción vigilada, precisamente para que se cumplan todas las normas de seguridad. Que, si hubo exceso de velocidad, el sr. Villalobos omitió tal advertencia al conductor y en ese sentido contribuyó al riesgo al no evitar, bajo su autoridad, que el conductor excediera la velocidad límite. De haber actuado conforme a sus específicas funciones, el daño no se habría producido y sin perjuicio de la omisión del uso de otros elementos de seguridad, como lo es el cinturón de seguridad, de allí que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil.

Refiere, que el sr. Villalobos estaba mandado para cumplir funciones que permiten la mejora de los procedimientos de seguridad, dentro de ellos, la conducción responsable, y en ese sentido su gestión de control de la conducción no fue puesta en práctica, ya que de haber advertido al conductor que debía respetar las restricciones de velocidad, el accidente no se hubiera producido. Esta omisión,



expuso tanto al conductor como al sr. Villalobos en forma imprudente o negligente al daño que finalmente terminó con la vida de ambos ocupantes del tracto camión. La exposición imprudente al daño se produce al permitir el sr. Villalobos el supuesto exceso de velocidad, o dicho de otra forma, al omitir actuar en razón de sus específicas funciones, evitando que el conductor excediera la velocidad, máxime si la gestión del sr. Villalobos era actuar en el sentido ya señalado. A mayor abundamiento, podría darse la concurrencia de culpas en el accidente, esto es, que la negligencia infraccional, no sólo dependía del conductor del móvil, sino que además de quien estaba llamado a supervisar y evitar la infracción reglamentaria. Que, por estas consideraciones, procede acoger la reducción solicitada de conformidad con la norma invocada, en subsidio y para el caso que la demanda de autos sea acogida.

Que, sin perjuicio de que su posición en cuanto al rechazo de la demanda en todas sus partes, según ya se expuso, se hace cargo, de la acción subsidiaria deducida por la contraria.

**2.- Que, en cuanto a la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, fundado en el artículo 2320 del Código Civil.**

Expone, que la norma del artículo 2320 consagra la responsabilidad civil del empresario por el hecho de sus dependientes, lo que en doctrina se denomina “culpa in eligendo vel vigilando”. En este caso el empresario no responde por la culpa del dependiente, sino que por su propia culpa, en efecto, el empresario responde por su propia culpa al elegir, vigilar, dirigir y controlar al empleado que directa o inmediatamente causó el daño respectivo. Que, este sistema de atribución de responsabilidad descansa entonces sobre el supuesto de que el empresario no cumplió adecuadamente con el cuidado debido atendida la autoridad que ejerce. La misma norma entonces articula lo que se denomina la prueba liberatoria, esto es, que con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere, no ha podido impedir el daño.

Añade, que en la especie, su representada, ha actuado con plena diligencia en las etapas de organización de la seguridad de su industria. Frente a ésta acción, resulta paradójica la postura de la demandante, toda vez que el criterio de atribución de responsabilidad por falta de cuidado en los términos que exige la norma del artículo 2320 del Código Civil se ve contradicha por el mismo relato del actor, quien manifiesta que el sr. Villalobos abordó el vehículo o tracto camión siniestrado en cumplimiento de una acción de seguridad, “conducción vigilada”. Entonces decir que por parte del empleador hubo negligencia, en este caso, de acciones de control, la sola presencia del sr. Villalobos en funciones de supervisión y auditoría de seguridad, demuestra precisamente lo contrario. El cuidado de su representada se manifiesta, además, en las siguientes acciones:

Que, en cuanto a la seguridad de los vehículos: expresa, que la antigüedad máxima es de 15 años; vehículo involucrado año 2012; señalizaciones de seguridad que indican las características del producto transportado; segundo tacógrafo electrónico que registra en el tiempo la velocidad, distancia recorrida, tiempo de conducción, etc.; permiso de circulación al día; ABS: sistema antibloqueo de ruedas en el frenado; seguro obligatorio al día; revisión técnica al día; certificados de gases al día; extintores de incendio; procedimiento de mantención preventiva empresas TAD; programa de mantenciones preventivas empresas TAD, mantenciones al día.

Que, en cuanto a la seguridad del semi remolque: permiso de circulación al día; seguro obligatorio al día; revisión técnica al día; certificado de hermeticidad al



día; certificado de reinspección al día, inscripción en sec; procedimiento de mantención preventiva empresas TAD; programa de mantenciones preventivas empresas TAD; mantenciones al día.

Que, en cuanto al conductor: contrato de trabajo; acreditación de experiencia; entrega de reglamento interno de orden, higiene y seguridad; entrega de epp para el cargo; entrega de derecho a saber; examen médico ocupacional vigente; controles de alcohol y drogas vigentes; registro carta compromiso con la seguridad; licencia de conducir vigente; examen sicosensométrico vigente.;

Que, en cuanto a las capacitaciones recibidas por el conductor, evaluaciones escritas: conocimiento de los productos; carga de productos calientes; descarga de productos; manejo bajo condiciones normales; manejo bajo condiciones adversas; conocimiento responsabilidades del conductor; procedimiento en casos de emergencia; precauciones de seguridad; conocimiento de otros procedimientos de manejo y operación de equipo (vehículo); interfaces y comunicaciones; responsabilidades administrativas; programa de seguridad.

Que, en cuanto a evaluaciones de competencias en terreno (aplicación efectiva de los procedimientos de trabajo): auditoría de conducción (conducción vigilada); procedimiento de carga; procedimiento de descarga.

Indica, que su representada ha ejercido todas las acciones de cuidado que su autoridad le confieren y sin embargo no ha podido impedir el daño, razón por la cual no es responsable del daño demandado, de conformidad con el instituto de la prueba liberatoria contenido en el artículo 2320 del Código Civil.

Que, para el caso improbable que se acoja la demanda de autos, y en subsidio, se apliquen las reducciones indemnizatorias ya desarrolladas a propósito de la acción principal, las que da expresamente por reproducidas.

Que, la acción también está dirigida a los herederos de don Alberto Díaz paraguas, ya individualizados en autos, señalando que respecto de estos también solicita el rechazo de la demanda de autos en todas sus partes.

Funda la solicitud de rechazo, en el hecho que la contraria en una interpretación extensiva que hace del concepto de vehículo para los efectos de la responsabilidad solidaria que podía recaer en relación al carro de arrastre o semi remolque de propiedad del causante don Alberto Díaz Parraguez, es improcedente.

Que, si bien la Ley N° 18.290, define lo que se entiende por vehículo, luego describe otros vehículos especiales, a los que siempre denomina como motorizados. Agrega, que al hablarse de solidaridad en el artículo 169 de la Ley N° 18.290, la interpretación que debe darse a aquella debe ser restrictiva, por ser de derecho estricto. Que, esta interpretación o aplicación restrictiva permite asociar la conducta culpable a quien gobierna, en este caso, el tracto camión, entendiendo que un semi remolque es una extensión del vehículo principal y que está supeditado al control de éste, por lo que debe entenderse que cuando el remolque opera, lo hace bajo la dependencia y gobierno del vehículo motorizado, y en ese aspecto la solidaridad sólo debe alcanzar al vehículo motorizado y no a un carro de arrastre, ya que de esa forma se conecta la culpa infraccional con el daño.

Que, sobre este punto, se produce una falta de legitimación pasiva respecto de todos y cada uno de sus representados (personas naturales), pues la ley asigna la solidaridad al dueño del vehículo motorizado y no de cualquier vehículo. Por otro lado, la falta de legitimación pasiva se demuestra por el hecho que era la empresa transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. la que tenía la mera tenencia del vehículo a título de comodato, pues su uso fue destinado a las actividades de la citada empresa.





Que, desde ésta perspectiva no resulta plausible imputarles responsabilidad, si el uso del vehículo estaba en manos de la empresa, razón por la cual debió ejercerse la acción indemnizatoria en contra de dicha empresa en relación al semi remolque, cuestión que no se hizo. En síntesis, la acción fue mal dirigida y debe rechazarse también por ese motivo.

Solicita, tener por contestada la demanda de autos en los términos ya señalados, con costas.

**Tercero:** Que, con fecha 17 de mayo de 2018, la parte demandante evacuó el trámite de **réplica**.

Expone, que existen hechos que la contraria ha reconocido o no refutado expresamente en su contestación, a saber: La ocurrencia del accidente de autos y las circunstancias, en cuanto, día, hora y lugar. Que, el demandado está conteste que cerca de las 9:45 am del día 27 de marzo de 2014, en la Ruta CH-90 que une las localidades de Traiguen y Lumaco, entre los 2.573,00 metros y los 2.593,00 metros al sur sur oriente de la Ruta 42, comuna de Lumaco, mientras que el Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY 92-2 y el Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3 conducidos por don José Luis Saldivia Opazo iban por el costado derecho de la calzada demarcada de la Ruta CH-90, en dirección al nor nor poniente, se volcó impactando a la retroexcavadora, placa patente CCRC-98, operada por don Gabriel David Robles Bizama quien se encontraba trabajando en un terreno particular adyacente a la berma del camino.

Añade, que los vehículos involucrados en el accidente de autos, fueron el Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY 92-2; Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3; Retroexcavadora, placa patente CCRC-98. Agrega, que los participantes fueron don José Luis Saldivia Opazo, conductor del Tracto Camión y Semi remolque; David Antonio Villalobos Rivera, Prevencionista de Riesgo que iba junto al conductor José Luis Saldivia Opazo y don Gabriel David Robles Bizama: Operador de la Retroexcavadora.

Que todos los participantes del accidente de autos fallecieron producto al mismo.

Que don José Luis Saldivia Opazo y don David Antonio Villalobos Rivera al momento de su fallecimiento se encontraban prestando servicios laborales de conformidad al Código de Trabajo para Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L.

Indica, que Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. era mero tenedor del Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY 92-2. Que don Alberto Ramón Díaz Parraguez era propietario del Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3. Que Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. se transformó en una sociedad denominada TAD SpA.

Que, don Alberto Ramón Díaz Parraguez falleció intestado siendo sus legítimos herederos doña María Silvia del Rosario Contreras Romo; don Marcelo Antonio Díaz Contreras; don Fernando Ramón Díaz Contreras; don Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras; doña Sylvia Valericia Díaz Contreras y don Alberto Ramón Díaz Parraguez.

Que, en relación a la alegación del demandado, en cuanto, a que la sociedad TAD SpA no tiene responsabilidad solidaria, por cuanto, esa responsabilidad corresponde exclusivamente a su antecesora Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L., ya que no habría ley alguna que impone la solidaridad,



señala que una E.I.R.L puede transformarse en una sociedad de cualquier tipo, cumpliendo los requisitos y formalidades que establece el estatuto jurídico de la sociedad, así lo dice expresamente el artículo 14 inciso 2 de la Ley N° 19.857.

Que, el demandado omite indicar que una transformación no es una extinción, toda vez que cuando la E.I.R.L se transforma en una SpA no pierde su personalidad jurídica. Agrega, que la escritura no dice que la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. se termina, desaparece o extingue, situación que por lo demás está regulada en el artículo 15 y siguientes de la Ley N° 19.587. Agrega, que cuando ocurre una transformación societaria no existe un nuevo ente jurídico sino que sigue siendo la misma persona jurídica, sólo con una nueva organización y razón social, pero no pierde su personalidad jurídica, esta sigue siendo la misma. Señala, que la Sociedad TAD SpA mantiene el Rut y el giro de la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L.

Que, en relación a la alegación de la demandada, en cuanto, a la no aplicación del artículo 169 de la Ley del Tránsito por no cumplirse los requisitos, señala, que esto es materia de prueba y que acreditará mediante los medios probatorios correspondientes, en especial, con el contrato de arrendamiento agregado bajo el N° 522 del Registro de Instrumentos públicos de la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal. Agrega, que como se indicó en la demanda se trata de un mero tenedor que a cualquier título es solidariamente responsable de conformidad al art. 169 de la Ley del Tránsito.

Que, en cuanto, a que el mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, señala, que también se trata de una materia que deberá ser probada en autos, sobre todo la concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual, pero, no es menos cierto, y plenamente aplicable en autos, que la Ley del Tránsito contempla presunciones respecto de la responsabilidad del infractor cuando se infringen las normas del tránsito.

Que, respecto del presunto exceso de velocidad y de la cristalización del sistema de frenos, señala, que el valor probatorio de cualquier documento deberá ser analizado de conformidad a la Ley y en relación armónica de la totalidad de los demás antecedentes aportados a la presente causa.

Que, en cuanto a la falta de legitimación activa e indeterminación del daño lucro cesante, indica, que sus representadas son los continuadores legales de don David Villalobos, pudiendo ejercer la presente acción, cuestión que la jurisprudencia ha fallado en reiteradas ocasiones.

Que, respecto a la indeterminación del lucro se remitirá a lo señalado en la demanda de autos.

Que, en cuanto a la reducción del monto indemnizatorio, sostiene, que el cónyuge y padre de sus representadas por ser el prevencionista de riesgo que iba efectuando una conducción vigilada se expuso temerariamente al riesgo es absurdo, toda vez que el Sr. Villalobos no iba conduciendo el vehículo. Añade, que el Sr. Villalobos se encontraba cumpliendo una función determinada que era evaluar la conducción por parte del conducto, más él no iba conduciendo. El Sr. Villalobos falleció en el accidente de autos por lo que no podrá dar su versión en estos autos.

Que, en cuanto a que el propietario del semirremolque no es responsable, por cuanto, lo sería sólo el propietario del tracto camión, señala que, es importante recordar que la Ley del Tránsito define vehículo como el medio con el cual, sobre el cual o por el cual toda persona u objeto puede ser transportado por una vía, lo que permite advertir que para la Ley vehículo se predica no sólo del medio con o



por el cual se transportan personas u objetos, sino también sobre el cual se transportan ellos, de forma tal que incluye claramente los acoplados que vayan adosados a un vehículo motorizado (Corte Suprema, rol 13.717-2013). Asimismo, define conductor como toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública, definición que pone de manifiesto el carácter unitario de un vehículo motorizado, no obstante los diversos elementos estructurales móviles que en el caso sub judice lo compongan, más aún si su doble sistema de frenos era accionado desde el tractocamión. Que, así se ha fallado por los Tribunales de Justicia. Solicita, tener por evacuada la réplica en la forma señalada y conferir traslado para la dúplica.

**Cuarto:** Que, con fecha 25 de mayo de 2018, la parte demandada evacuó el trámite de **dúplica**.

Expresa, en primer término que ratifica todos y cada uno de los argumentos vertidos en la contestación de la demanda de autos. Que, en segundo lugar, señala que no resulta efectivo que ha reconocido o no refutado los puntos que aborda la contraria en su réplica.

Que, la ocurrencia del hecho se ha fundado en un informe SIAT que su parte ha refutado, razón por la cual, las circunstancias del accidente no se pueden dar por no discutidas, pues niega que el accidente se haya producido conforme a lo expuesto por la demandante. Agrega, que la demandante intenta producir un error en el Tribunal a través del asentamiento de varios supuestos falsos atribuidos a su parte.

Que, la contraria tampoco aborda la inexistencia de la solidaridad como un instituto de derecho estricto, esquivando los efectos jurídicos que ha planteado sobre este punto. Agrega, que como lo ha planteado la demandante, varios de los puntos de prueba, necesariamente deben ser objeto de prueba, incluso las presunciones del infractor a que se refiere deben ser objeto de prueba del supuesto fáctico que sirve de base a la presunción, pues la misma no se puede obtener sólo con referir la norma.

Indica, que la demanda de autos exige una indemnización por daño moral por rebote, razón por la cual existe una evidente contradicción entre obrar por el daño propio que por el daño sufrido por el causante, y en ese sentido la contraria no ha demandado lucro cesante en calidad de herederos, agrega, que ambas acciones tienen distinto origen y tratamiento. Solicita, tener por evacuado el trámite de la dúplica.

**Quinto:** Que, con fecha 14 de noviembre de 2018, se llevó a efecto **audiencia de conciliación** decretada en autos, con la asistencia de la parte demandante, representada por su abogado don José Luis Ovalle Zañez y en rebeldía de la parte demandada.

Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce por la inasistencia de la demandada.

**Sexto:** Que, con fecha 16 de noviembre de 2018 y 23 de mayo de 2019, **se recibió la causa a prueba**.

**Séptimo:** Que, con fecha 16, 17 de mayo, 7, 14, 15 de junio, 13 y 17 de julio de 2019, **la demandante acompañó los siguientes documentos:** 1.- certificado de anotaciones vigentes del Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil del Semiremolque, Marca Randon, año 2000, placa patente JC.8492-3, de fecha 23 de abril del año 2014, figurando como propietario de dicho vehículo don Alberto Ramón Díaz Parraguez, cédula nacional de identidad N.º 5.237.035-3; 2.- certificado de anotaciones vigentes del Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil del Tractocamión, Marca Freightliner, año 2012,



placa patente DPJY 92-2, de fecha 23 de abril del año 2014, figurando como mero tenedor Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L, Rut N.º 76.412.470-7;

3.- copia autorizada de la Protocolización del Contrato de Arrendamiento con opción de compra suscrito entre Banco Itau Chile y Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L, Rut N.º 76.412.470-7, en la Notaria de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, con de fecha 31 de enero de 2012, Repertorio 2203, respecto del Tractocamion, Marca Freightliner, año 2012, placa patente DPJY 92-2;

4.- certificado de matrimonio celebrado entre don Alberto Ramón Díaz Parraguez, cédula nacional de identidad N.º 5.237.035-3, y doña María Silva del Rosario Contreras Romo, cédula nacional de identidad N.º 5.718.830-8, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

5.- certificado de defunción de don Alberto Ramón Díaz Parraguez, cédula nacional de identidad N.º 5.237.035-3 emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

6.- certificado de nacimiento de don Fernando Ramón Díaz Contreras, cédula nacional de identidad N.º 12.627.604-4, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

7.- certificado de nacimiento de don Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras, cédula nacional de identidad N.º 13.025.536-1, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

8.- certificado de nacimiento de don Marcelo Antonio Díaz Contreras, cédula nacional de identidad N.º 10.746.151-5, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

9.- certificado de Nacimiento de doña Sylvia Valericia Díaz Contreras, cédula nacional de identidad N.º 13.766.222-1, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

10.- copia de la Posesión Efectiva quedada al fallecimiento de don Alberto Ramón Díaz Parraguez, concedida mediante Resolución Exenta N.º 26758 de fecha 29 de noviembre de 2016 e inscrita en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas bajo el N.º 69475 del Registro Civil e Identificación correspondiente al año 2016;

11.- certificado de matrimonio celebrado entre don David Antonio Villalobos Rivera, cédula nacional de identidad N.º 13.376.582-4, y doña Paola Roxana Parra Contreras, cédula nacional de identidad N.º 13.376.579-0, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

12.- certificado de defunción de don David Antonio Villalobos Rivera, cédula nacional de identidad N.º 13.376.582-4, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

13.- certificado de nacimiento de doña Emilia Belén Villalobos Parra, cédula nacional de identidad N.º 23.856.923-0, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;

14.- informe psicológico de doña Paola Roxana Parra Contreras confeccionado por el psicólogo don Luis Antonio Tapia Macaya, cédula de identidad N.º 16.284.409-1, con fecha 11 de noviembre de 2015;

15.- cartola cronológica Cuenta de Capitalización (periodo Enero/1981 a Mayo/2019) emitida con fecha 29 de mayo de 2019 por AFP Habitat correspondiente a don David Villalobos Rivera, cédula de identidad N.º 13.376.582-4;

16.- copia autorizada de la licencia de conducir de don David Antonio Villalobos Rivera, donde consta ser clase B y C;

17.- copia de las declaraciones prestadas ante la Fiscalía de Traiguén en la causa penal RUC 1400308529-6, con fecha 06 de mayo de 2014, referente al accidente de autos, por don Aristóteles Miranda Escobar, Rut N.º 9.525.051-3, domiciliado en avenida Colón N.º 8232, comuna de Hualpén, don Jorge Alberto Aguirre Madrano, Rut N.º 9.264.232-1, domiciliado en calle Germán Riesco N.º 2931, comuna de Talcahuano, don José Antonio Bustos Riquelme, Rut N.º 8.971.480-k, domiciliado en sector El Valle, pasaje 12, casa 192, comuna de Talcahuano, don Rubén José Campos Hidalgo, Rut N.º 6.726.053-8, domiciliado en calle Carlos Dittborn N.º 319, comuna de Talcahuano, don Patricio Rubén Elizalde Jofré, Rut N.º 8.608.064-8, domiciliado en calle 101, Condominio 1170, comuna de Concepción;



18.- copia de las declaraciones prestadas ante Carabineros de Chile, Retén Lumaco, con fecha 27 de marzo de 2014, referente al accidente de autos, por don Homero Esteban Cartes Jara, Rut N.º 10.522.756-6, domiciliado en calle Pedro Montt N.º 464, comuna de Capitán Pastene, don Pedro Enrique Muñoz León, Rut N.º 9.509.453-8, domiciliado en calle Evangelista Torecelli N.º 1725, Parque Industrial Bio Bio, comuna de Talcahuano; 19.- copia de los siguientes Informes Técnicos elaborados por la Prefectura Cautín N.º 22, Subcom. I.A.T. y Carrt. Cautin de Carabineros de Chile para la Fiscalía Local de Traiguén. Estos informes son: - Informe Técnico N.º 36-A-2014 de fecha 25 de julio de 2014, investigado y suscrito por don Juan Paredes Acevedo, Capitán de Carabineros y visado por don Iván Ketterer Lavandero Teniente Coronel de Carabineros; - Informe Técnico Pericial Mecánico N.º 09-B-2013 de fecha 20 de abril de 2014, confeccionado por el Perito de Carabineros Samuel Rocca Brito, corregido por el Ingeniero Mecánico de Carabineros Omar Mínguez Rivera y visado por Enrique Monras Álvarez Teniente Coronel de Carabineros; -Informe Técnico Pericial Mecánico N.º 21-B-2014 de fecha 09 de julio de 2014, confeccionado por el Perito de Carabineros e Ingeniero Mecánico de Carabineros Omar Mínguez Rivera y visado por Ignacio Toledo Campos Capitán de Carabineros; 20.- protocolo de autopsia IX-TMC-159-2104 efectuado la perito Dra. Nubia Riquelme Zornow, Médico Legista, del Servicio Médico Legal, con fecha 15 de abril de 2014 para la causa llevada en Fiscalía RUC 14/308529-6; 21.- informe médico de fecha 04 de julio de 2014 elaborado por el DR. Aquiles Conexeros Pérez, Neuropsiquiatra, respecto de doña Paola Roxana Parra Contreras; 22.- fijación fotográfica conforme al Parte Policial N.º 44 de fecha 27 de marzo de 2014 confeccionado por el Carabinero Jonathan Vera González del Reten de Carabineros de Lumaco; 23.- copia autorizada de la inscripción de fojas 83 número 100 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Casablanca correspondiente al año 2005; 23.- copia autorizada de la inscripción de fojas 24 número 27 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Casablanca correspondiente al año 2007; 24.- copia autorizada de la inscripción de fojas 108 número 100 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Casablanca correspondiente al año 2016; 25.- copia autorizada de la inscripción de fojas 59 número 37 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Concón correspondiente al año 2016; 26.- copia autorizada de la inscripción de fojas 80 número 39 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Concón correspondiente al año 2017; 27.- copia de la cédula de identidad emitida por el Registro Civil e Identificación de Chile de don Luis Antonio Tapia Macaya, cédula de identidad N.º 16.284.409-1, en la que consta que su profesión es la de Psicólogo; 28.- contrato de trabajo suscrito por don David Villalobos Rivera y la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. de fecha 04 de septiembre de 2006; 29.- anexo de contrato de fecha 01 de mayo de 2007 y modificación de contrato de fecha 01 de agosto de 2010; 30.- liquidación de remuneración de don David Villalobos Rivera correspondiente al mes de diciembre del año 2013; 31.- parte denuncia policial N.º 00044 de fecha 27 de marzo de 2014 confeccionado por Carabineros de Chile que da cuenta del accidente de autos; 32.- copia del informe SIAT requerida por el abogado Francisco Hurtado Peñaloza con fecha 31 de julio de 2014 a la Fiscalía de Traiguén en causa RUC 1400308529-5; 33.- copia del contrato de convenio colectivo que mantenía la empresa demandada con sus trabajadores de fecha 23 de agosto de 2013. Mediante el mismo aparece que la empresa contrató un seguro por algunos de sus trabajadores en caso de



fallecimiento de 1000 UF; 34.- copia de la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el abogado Francisco Javier Hurtado Peñaloza en representación de doña Érica del Carmen Salazar Peña; Matías Ignacio Robles Salazar; Teresa Verónica Lizama Troncoso; Madelaine Arely Mella Lizama; Víctor Omar Castillo Lizama y Nelson Javier Castillo Lizama en contra de Petrobras Chile Distribución Limitada y Transportes Alberto Díaz Parraguez Limitada, producto al fallecimiento de don David Gabriel Robles Lizama en el accidente de fecha 27 de marzo de 2014, que corresponde al mismo accidente de estos autos. Dicha demanda dio lugar al procedimiento civil por indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014 ante el Vigésimo Segundo (22º) del Juzgado Civil de Santiago; 35.- copia de la contestación de la demandada Transportes Alberto Díaz Parraguez a la demanda interpuesta en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014 ante el Vigésimo Segundo (22º) del Juzgado Civil de Santiago; 36.- copia de la réplica a la contestación de demanda interpuesta por la demandada Transportes Alberto Díaz Parraguez a la demanda interpuesta en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014 ante el Vigésimo Segundo (22º) del Juzgado Civil de Santiago; 37.- copia de la sentencia definitiva de fecha 18 de octubre de 2016, dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado en lo Civil de Santiago en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014; 38.- copia del Recurso de casación y apelación interpuesto por el abogado Francisco Javier Hurtado Peñaloza en contra de la sentencia definitiva de fecha 18 de octubre de 2016, dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado en lo civil de Santiago en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014; 39.- copia de la sentencia de segunda instancia de fecha 07 de noviembre de 2017, dictada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en auto sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol Corte N.º 1437-2017, conociendo del recurso de casación y apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado en lo civil de Santiago en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014; 40.- copia de la escritura pública de transacción suscrita por el abogado Francisco Javier Hurtado Peñaloza en representación de doña Érica del Carmen Salazar Peña; Matías Ignacio Robles Salazar; Teresa Verónica Lizama Troncoso; Madelaine Arely Mella Lizama; Victor Omar Castillo Lizama y Nelson Javier Castillo Lizama y sociedad TAD SpA de fecha 12 de febrero del año 2019 en la Notaría de Santiago de don Gonzalo Hurtado Morales, Repertorio N.º 641-19. En esta escritura la sociedad TAD SpA reconoce ser la continuadora legal de la Empresa de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L; 41.- informe psicológico de doña Paola Roxana Parra Contreras confeccionado por el psicólogo don Luis Antonio Tapia Macaya, cédula de identidad N.º 16.284.409-1, con fecha 11 de noviembre de 2015; 42.- copia autorizada en la Notaria de Chiguayante de doña Guacolda Aedo Ormeño con fecha 11 de julio de 2019, de la cédula de identidad de don Luis Antonio Tapia Macaya, Psicólogo, N.º 16.284.109-1, emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación; 43.- copia autorizada en la Notaria de Chiguayante de doña Guacolda Aedo Ormeño con fecha 11 de julio de 2019, del Informe Psiquiátrico confeccionado por el doctor Aquiles Conexeros Pérez,



Neuropsiquiatra de fecha 04 de julio de 2014; 44.- De la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el abogado Francisco Javier Hurtado Peñaloza en representación de doña Érica del Carmen Salazar Peña; Matías Ignacio Robles Salazar; Teresa Verónica Lizama Troncoso; Madelaine Arely Mella Lizama; Víctor Omar Castillo Lizama y Nelson Javier Castillo Lizama en contra de Petrobras Chile Distribución Limitada y Transportes Alberto Díaz Parraguez Limitada, producto al fallecimiento de don David Gabriel Robles Lizama en el accidente de fecha 27 de marzo de 2014, que corresponde al mismo accidente de estos autos. Dicha demanda dio lugar al procedimiento civil por indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N° 27.883-2014 ante el Vigésimo Segundo (22°) del Juzgado Civil de Santiago; 45.- de la contestación de la demandada Transportes Alberto Díaz Parraguez a la demanda interpuesta en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014 ante el Vigésimo Segundo (22°) del Juzgado Civil de Santiago; 46.- de la réplica a la contestación de demanda interpuesta por la demandada Transportes Alberto Díaz Parraguez a la demanda interpuesta en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014 ante el Vigésimo Segundo (22°) del Juzgado Civil de Santiago; 47.- de la sentencia definitiva de fecha 18 de octubre de 2016, dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado en lo Civil de Santiago en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883-2014; 48.- Recurso de casación y apelación interpuesto por el abogado Francisco Javier Hurtado Peñaloza en contra de la sentencia definitiva de fecha 18 de octubre de 2016, dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado en lo Civil de Santiago en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883- 2014; 49.- sentencia de segunda instancia de fecha 07 de noviembre de 2017, dictada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en auto sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol Corte N.º 1437-2017, conociendo del recurso de casación y apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado en lo civil de Santiago en causa sobre indemnización de perjuicio caratulado “Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. y otro”, Rol N.º 27.883- 2014; 50.- copia autorizada de escritura pública de transacción suscrita por el abogado Francisco Javier Hurtado Peñaloza en representación de doña Érica del Carmen Salazar Peña; Matías Ignacio Robles Salazar; Teresa Verónica Lizama Troncoso; Madelaine Arely Mella Lizama; Víctor Omar Castillo Lizama y Nelson Javier Castillo Lizama y sociedad TAD SpA de fecha 12 de febrero del año 2019 en la Notaría de Santiago de don Gonzalo Hurtado Morales, Repertorio N.º 641-19.

**Octavo:** Que, con fecha 30, 31 de mayo, 11 de junio de 2019, **la parte demandada acompañó los siguientes documentos:** 1.- acta de comparecencia ante la Dirección del Trabajo de Angol; 2.- actas de comité Paritario; 3.- campaña de seguridad; 4.- carta de compromiso; 5.- certificado de seguro de Penta de 28/03/2014; 6.- Contrato de Trabajo de David Villalobos; 7.- Curso de fatiga y autocuidado; 8.- Descriptor del cargo; 9.- DIAT David Villalobos; 10.- Entrega de EPP; 11.- Entrega de RIOHS; 12.- Entrega de tríptico y normas; 13.- EV sobre responsabilidades; 14.- EV sobre seguridad; 15.- EV manejo condiciones normales; 16.- EV procedimiento emergencia; 17.- History record Saldivia; 18.- Informe



Junio 2018; 19.- Anexo dos informe junio 2018; 20.- Anexo uno informe junio 2018; 21.- Diploma; 22.- Certificado título; 23.- Curriculum; 24.- Inicio investigación IST; 25.- Inspección mensual febrero 2014; 26.- Inspección mensual enero 2014; 27.- Intervención preventiva IST; 28.- Licencia de conducir y credencial de evaluación; 29.- Medidas inmediatas IST; 30.- Notificación Seremi y DT; 31.- Examen pre-ocupacional; 32.- Póliza del tracto camión PP DYJY-92; 33.- Recepción DAS; 34.- Recepción tríptico normas; 35.- Reconocimiento guía del conductor; 36.- Registro de entrega RIOHS Seremi Salud; 37.- Registro participación campaña; 38.- Reunión con IST; 39.- RIOHS Transportes Alberto Díaz EIRL; 40.- Seguros de accidentes Alberto Díaz EIRL; 41.- Cuestionario Smith System de Sr. Saldivia; y 42.- Resolución N° 015 CUN N° 2328328 de 21 de abril de 2014, junto a la carta conductora de fecha 16 de mayo de 2014.

**Noveno:** Que, con fecha 11 de junio de 2019, **se recepcionó oficio de AFP Hábitat**, mediante el cual se informa sobre los antecedentes y/o cotizaciones previsionales de don David Villalobos Rivera, Cédula de Identidad N° 13.376.582-4.

**Décimo:** Que, con fecha 12 de junio de 2019, **se llevó a efecto audiencia de prueba testimonial de la parte demandada.**

Comparece el testigo don **Jorge Felipe Carvajal Carvajal**, expone que la familia del sr. David Villalobos recibe la pensión de la Mutual correspondiente y en este caso que fue del IST, la cual fue gestionada por la empresa y dicha mutual entregó la resolución correspondiente del otorgamiento de dicho beneficio, en dicha resolución sólo menciona el tema del otorgamiento ya que el monto la empresa no lo puede conocer porque está tipificado en la resolución que los montos se entregan solamente a la persona beneficiaria, pero esto se gestionó al segundo mes de ocurrido el accidente, fue rápido el beneficio de la familia.

Que, de acuerdo a los antecedentes que maneja todo el personal de la empresa, y sobretodo David que era el encargado de la seguridad de la compañía, tenía pleno conocimiento de cómo él debía realizar de manera correcta este tipo de procedimiento de monitoreo en ruta, esto es, ir atento a las condiciones del tránsito, ir con cinturón de seguridad, ir atento a la forma de manejo del conductor. Que en este sentido, de acuerdo a los antecedentes, al momento del accidente a don David Villalobos se le encontró sin cinturón de seguridad, a diferencia del conductor, razón por la cual al momento del impacto no estaba en su asiento. Esto le consta por las declaraciones tomadas del respectivo parte policial y las fotografías que se tomaron para el respectivo reporte de accidente.

Que, la resolución del IST a que hizo referencia corresponde a la resolución 015 CUN N° 2328328 que en este acto se le exhibe y es la resolución que se resuelve en el punto dos que procede, por tanto, otorgar a las prestaciones económicas establecidas en la ley 15.744, de acuerdo a los considerandos.

Indica, que no estuvo en el momento exacto del accidente. Lo que sabe, es de acuerdo a toda la investigación y a la acción presencial que hizo después del accidente, ya que por el cargo viajó a la zona a prestar todo el apoyo legal correspondiente, tanto a la empresa como a la familia.

Que, en cuanto a las fotografías, indica que de acuerdo a la información que maneja fue el personal de la autopista, y la Fiscalía correspondiente pero no tiene seguridad que el fiscal haya sacado fotos pero sí que la autopista. Agrega, que la fecha del accidente, no la sabe exactamente pero fue en Marzo del año 2014.

Comparece el testigo don **Paulo Renato Luccini Traverso**, quien expresa que de acuerdo a los análisis realizados, es su opinión que no hay responsabilidad de los demandados, y en qué se basa para afirmar esto, en que el informe mecánico





realizados por SIAT señala que tanto el tracto camión como el semi remolque no presentaban fallas mecánicas y se habían hecho las mantenciones correspondientes. Que, se calculó la velocidad crítica en curva que es la velocidad en que el vehículo no es capaz de inscribirse en la curva derivando fuera de ella, esta se logró estimar gracias al levantamiento topográfico georreferenciado que permitió conocer las características físicas del camino, el perfil transversal, el perfil longitudinal y todas las medidas relevantes del mismo, de manera que conociendo el radio de curvatura de la curva donde se produce el accidente la pendiente del camino y el peralte del mismo se pudo llegar a determinar la velocidad crítica en 98,5 kms por horas si mal no lo recuerdo. El camión circulaba, de acuerdo al último punto del GPS, a 83 kms por hora, por lo tanto la causa del volcamiento no es explicable por el fenómeno de la velocidad, sin embargo tratándose de un tracto camión que llevaba un semi remolque estante fue necesario determinar el centro de gravedad del mismo y lo que permitió a su vez con los datos de la carga y las características técnicas de la unidad tracto camión semi remolque permitió determinar que la velocidad de vuelco era 85,5 kms por hora, por lo tanto no es en este caso la velocidad la causal del volcamiento, queda demostrado con esto.

Aduce, que es importante también señalar que el camino previo al sitio del suceso tenía una zona de curvas y contracurvas con pavimento en mal estado de manera que la velocidad regulada en esa zona de curvas y contracurvas era de 30 kms por hora, a partir de la reconstitución de las velocidades del camión gracias a su GPS se pudo determinar que en la zona de curva y contracurvas que el camión llevaba velocidades bajo los 30 kms por hora, y en la salida de la última curva existe una señal " Fin zona de restricción" en que el eje de la calzada está demarcado en forma segmentada permitiendo el adelantamiento, por lo tanto se entiende que los 30 kms no rigen en esa zona debido a que es una recta. Posterior a esta recta viene la curva donde se produce el accidente, al respecto SIAT señala como causa del accidente una posible cristalización de las balatas por uso excesivo de los frenos, sin embargo SIAT no hizo el ejercicio de verificar con el GPS a qué velocidad viajaba el camión en zona de curva y contracurva.

Que, otro elemento importante que desacredita la causa señalada por SIAT es la existencia de huellas antes de la zona de volcamiento, para que un vehículo marque huellas de frenada se debe producir el bloqueo de las ruedas, lo cual es señal que los frenos sí funcionaron porque de haber estado cristalizados las ruedas no se habrían bloqueado. Otro elemento importante en el sitio del suceso que no fue relevado consistió en huellas dejadas por la retroexcavadora desde la calzada hacia el camino interior, hay fotografías tomadas el mismo día del accidente que muestran huellas con impronta de tierra del neumático de la retroexcavadora, adicionalmente en el sitio del suceso también había algún acopio de áridos por lo que las huellas de la retroexcavadora estarían indicando que habría un traslado de áridos hacia el camino interior.

Que, de los análisis que realizaron en el Informe Técnico fue el efecto de la transferencia de peso en la frenada final del camión que permite inferir la causa basal, es decir antes del punto de volcamiento hay una frenada intensa que estima se debió a la percepción de un peligro inminente que podría haber sido la presencia de la retroexcavadora moviéndose desde la calzada hacia el camino interior.

Indica, como conclusión que no es descartable la hipótesis que la retroexcavadora se haya encontrado en una trayectoria entre la calzada y el camino interior. Además, que la conclusión de SIAT referente a la cristalización de frenos es incorrecta por la existencia de huellas de frenada.



Que, la velocidad crítica de salida en curva fue de 95,8 kms por hora.

La velocidad de vuelco se calculó en 85,5 kms por hora, en tanto que la velocidad del camión reducida por la fuerza del efecto de frenado antes del volcamiento se redujo a 80 kms por hora, y por consiguiente la causa basal del accidente es una frenada a fondo como maniobra evitativa de un peligro Inminente que produce la transferencia de fuerza al eje delantero perdiendo el semi remolque la estabilidad lateral y volcando.

Que, se hizo un análisis para determinar las distancias, tiempos y posiciones de los móviles. Por las huellas que se pudieron apreciar por fotografías tomadas el mismo día del accidente hay señales de una frenada extrema, si se considera que el camión iba a una velocidad inferior a la velocidad de vuelco e inferior a la velocidad crítica esa maniobra de frenada extrema tienen que haberse realizado a la presencia de un peligro inminente que pudo haber sido la presencia de la retroexcavadora moviéndose desde la calzada hacia el camino interior. Se hizo un análisis de las posiciones y punto de percepción posible del conductor del camión referente a la posición de la retroexcavadora determinando que el punto de percepción eran cuarenta metros, por lo tanto también se llevó a determinar que con 40 mts el camión no podía evitar el impacto ni detenerse antes de los 40 metros.

Que, toda esta información está contenida en su Informe Técnico de fecha Junio del año 2018, que su profesión es Ingeniero de Transporte con un diploma de especialización en Investigación de Accidentes de Tránsito de la Universidad de Zaragoza, y para este estudio en particular se consultaron diferentes estudios realizados por científicos, investigadores de Estados Unidos, Europa, China que dicen relación sobre por ejemplo: estabilidad de las unidades tractores semi remolques, colisiones de vehículos industriales o comerciales, comportamiento dinámico de los semi remolques cisternas, eso en general.

Que, reconoce el informe Técnico "Accidente por Volcamiento" que en este acto se le exhibe.

Agrega, que es perito desde el año 2002, ha realizado, en una relación estimada, más de 800 investigaciones de accidentes para la Fiscalía Regional, Para el Consejo de Defensa el Estado y Peritaje particulares, adicionalmente ha sido profesor de Ingenieria Vial y Transporte de la Universidad Santa María y San Sebastián para la Carrera de Ingeniería Civil.

Que, tuvo a la vista todos los antecedentes que se contaban en la carpeta investigativa en la causa penal dentro de ella estaba por ejemplo: el Informe SIAT, el parte policial, informes de alcoholemia, informe de autopsias, fotografías aportadas a la carpeta investigativa y adicionalmente se contó con un video y fotografías tomados a pocas horas de ocurrido el accidente, el video hace el mismo recorrido del camión.

Adicionalmente a eso fue personalmente al sitio del suceso con personal que realizó un levantamiento topográfico georreferenciado, la importancia de un levantamiento topográfico georreferenciado es que permite trabajarlo en capas con imágenes de Google earth.

Que, en la elaboración de su informe se utilizaron básicamente tres programas: El Ractt Reconstrucción analítico de colisiones de tránsito terrestre, que son programas usados por policías de Argentina, Brasil y Paraguay y entiende que lo está evaluando actualmente SIAT, también se utilizó el Programa de CRASH MATH y también es un reconstructor analítico de la empresa Faro, que es una empresa técnica que se dedica a la venta de todos estos aparatos de mediciones satelitales y



topográficas, y el Software Aras 360 que es un software gráfico que permite general a partir de plano imágenes 3 D y generar animaciones y otras posibilidades. Que, las conclusiones de SIAT son contradictorias puesto que señalan como causa basal la cristalización de las balatas por un uso excesivo de los frenos, sin embargo si hubieran fijados las velocidades del camión del GPS en las zonas de curvas y contracurvas habrían podido determinar que él viajaba a velocidades bajo los 30 kilómetros, a 20 kilómetros en algunas curvas, de acuerdo al registro del GPS, adicionalmente, como señaló anteriormente, el hecho que hayan quedado huellas de frenado es señal inequívoca que los frenos funcionaron porque hubo bloqueo de ruedas puesto la huella se produce con el neumático bloqueado por lo tanto el roce del neumático de la rueda bloqueado con el pavimento es un punto alcanza una temperatura tal para el roce que deja la marca de frenado.

Que, en este caso particular, si considera el informe del mecánico del SIAT al señalar que los sistemas mecánicos se encontraban en buen estado entendemos que el sistema de frenos se encontraba en buen estado por lo tanto no sería atribuible a una falla mecánica per se. Podría darse en parte la cristalización por una frenada extrema.

Que, de acuerdo a todos los análisis realizados se pudo llegar a determinar que el accidente era inevitable. En primer lugar hay una frenada intensa antes del volcamiento que correspondería a una reacción del conductor para evitar un peligro inminente, la distancia de percepción del conductor del camión dada la configuración de la curva para distinguir un objeto que estaba en la calzada era de 40 metros, la distancia de detención de un camión que circulaba entre 83 km y 80 km por horas es mayor que 40 metros por hora por tanto era inevitable.

Que, dentro del Informe que se le exhibe hay distintos grupos de fotografías, algunas efectivamente tomadas por él en su visita al sitio del suceso y otras aportadas por el Informe SIAT y hay otras fotografías aportadas por otras partes del mismo día del suceso. La fotografía de la página 5 del Informe, la fotografías de páginas 6, 7, 8, 9,10. Las fotografías de la página 12 la número 18, en la página 13 la foto 19 y 20, en la página 14 foto 21, en la página 15 a la 19 hay fotogramas de un video.

Que, elaboró el informe pues la empresa lo contactó a través del abogado para elaborar un Informe Técnico del accidente.

**Undécimo:** Que, con fecha, 13 y 14 de junio de 2019, **se llevó a efecto audiencia de prueba testimonial de la parte demandante.**

Comparece doña **Ana María Salazar Araneda**, quien expresa que conoce a Paola Parra y Emilia Villalobos desde hace unos 15 años a la fecha y a Emilia desde que nació hace 7 años. Agrega, que ellas viven en Chiguayante no sabe la dirección exacta, pero sabe llegar y es cerca del terminal de los buses de Chiguayante Sur. Indica, que Paola era muy feliz con su esposo don David Villalobos, cuando se casó el año 2011 en noviembre, hablaba muy bien de su esposo quien era un buen hombre, buen esposo y buen padre.

Que, el 27 de marzo de 2014 don David Villalobos tuvo un accidente de tránsito en la localidad de Lumaco que le costó la vida. Paola estuvo con psicólogo y psiquiatra, tomaba pastillas para la depresión, pues estaba muy deprimida y muy preocupada con el futuro de su hija, qué iba a pasar con ella. Agrega, que él era quien solventaba la casa. Antes del accidente ella era una niña muy feliz andaban siempre juntos para todas partes, siempre comentaba que era un excelente hombre.

Agrega, que después del accidente nunca ha vuelto a ser la misma, siempre anda triste, a pesar que ella tuvo terapeutas, no ha sido la misma.



Indica, que los perjuicios no tienen precio. Que, Emilia está muy afectada, porque es una niña retraída, no tiene amigos anda con su mamá para todos lados, porque teme perderla.

Comparece don **Hernán Guillermo Améstica Silva**, quien declara que conoce a doña Paola Parra desde hace unos 20 años a la fecha y a su hija Emilia Villalobos también por intermedio de su hermana. Que, viven en Chiguayante Sur, ha ido hasta su casa. Agrega, que su marido don David Villalobos tuvo un accidente de tránsito en Lumaco el año 2014, que le costó la vida, fue accidente de trabajo.

Que, doña Paola Parra antes del accidente era muy alegre, y estaban felices en su matrimonio junto a su hija, salían a pasear los tres juntos. Señala, que después del accidente doña Paola Parra al perder a su marido se fue abajo moral y psicológicamente. Que, vio a un médico y debió ser medicada por su estado, que después de la muerte de su marido no ha vuelto a tener novio.

Que, el fallecimiento de don David Villalobos, afectó a doña Emilia Villalobos bastante, por la ausencia de su papá. Es una niña callada le afectó en ese sentido. Además, el fallecimiento de don David Villalobos afectó económicamente a la familia, pues era el sustento de su familia.

Comparece don **Lupercio Segundo Cuevas Guzmán**, quien expresa que conoce solamente los hechos ocurridos, no conoce a las partes en este juicio. Agrega, que sabe y le consta, que con fecha 14 de marzo de 2014, no tiene bien claro la hora, don David Villalobos, ignora apellido materno, fue a trabajar a su empresa llamada PETROBRAS, ubicada en calle San Vicente, Talcahuano, con destino a Lumaco, ese era el trayecto para ir a entregar el combustible, y ese día sucede el accidente, causando la muerte o fallecimiento de don David Villalobos.

Que, respecto a los perjuicios que se le ocasionaron a su familia, como su cónyuge doña Paola Parra y su hija llamada Emilia, de 7 años a la fecha, cuando falleció su padre tenía 2 años. Paola, queda sin su cónyuge y sin el padre de su hija y no tener claro, hasta el día de hoy, como fue su muerte, le causó la desesperación de quedarse sola, porque él era el sustento del hogar y de la noche a la mañana, se quedaron sin nada, ella ha estado con psiquiatras y psicólogos y la niña, hasta el día de hoy, no puede asumir la ausencia de su padre. A Emilia, la familia la ha tenido que estar apoyando para que entienda, porque desapareció su papá.

A Paola Parra, la conoce hace 30 años a la fecha desde que era una niña pequeña y la ha visto a lo largo de su vida desarrollarse, antes del fallecimiento de su esposo, era mujer alegre, feliz, participativa, porque ella pertenecía a la misma Iglesia, donde asiste, pero después del fallecimiento de su esposo, se apartó, se aisló, para tratar de entender, porque había pasado todo esto. Ella, estuvo con tratamientos de fármacos, por el psiquiatra. También, perjuicios económicos, para poder criar su hija y educarla, vestirla, alimentarla y la salud, que son las necesidades básicas para un menor, como dije, su esposo era el único sostén del hogar. A ella lo que más le duele es no saber, como sucedieron las cosas y no saber, porque perdió a su marido. No puede señalar un monto, por estos perjuicios. Que, percibe este daño, porque siempre ha tenido muy buena comunicación con la demandante doña Paola Parra y junto a su familia. Dicha relación existe antes del accidente y en la actualidad. Que, se visitan cada dos meses y se comunican, siempre por celular y preguntando por su niña. Y desde que ella muy pequeña. Que, siempre son sus conversaciones muy tristes, porque nunca más volvió a ser la misma persona, ella cambió totalmente hasta el día de hoy.

Que, tiene entendido que ella vivía de lo que le entregaba su marido, se dedicó a hacer dueña de casa y criar a su hija, ella tuvo que buscar trabajo, para darle la



vida a su hija, que estaba acostumbrada a llevar cuando su padre estaba vivo y la hija se fue quedando sola, y eso fue la parte que más le perjudico a Paola.

Que, para la menor ha sido un daño tremendo, ella ha ido creciendo con muchas necesidades económicas y la ausencia de su padre, como en las fechas importantes, el día del padre, la Navidad etc, ha sido muy complicada esa parte para ambas.

Indica, que la muerte no tiene precio, es un tema que siempre conversa con Paola, que la muerte de su esposo y el padre de su hija, no tiene ningún precio para ellas.

Comparece don **Luis Antonio Tapia Macaya**, quien expone que en su calidad de Psicólogo, fue consultado por doña Paola Parra Contreras, de 37 años, con fecha 18 de agosto de 2015, el motivo de su consulta fue, por el fallecimiento de su marido accidental, muerte no esperada, no normativa, al pedir explicaciones sobre su consulta, le cuenta, que falleció su marido en un accidente de trabajo automovilístico en la carretera y se le complica sus quehaceres de llevar tanta responsabilidad respecto a su única hija y menor y el trabajo, con sobrecarga emocional debido, que tiene que cargar con sus emociones de la perdida y respecto a la hija.

Que, por el relato de ella, manifiesta que su hija estaba muy irritable, con problemas para dormir, inestable emocionalmente, falta de concentración, inconvenientes para controlar esfínter, una depresión infantil, asociada a la pérdida de su padre. En el caso de Paola, está con una depresión persistente, la trató durante 6 meses, una vez a la semana aproximadamente, pero por sus problemas económicos, no la pude seguir tratando, pero con las sesiones que asistió, pudo claramente apreciar y no hay duda en su diagnóstico, que es la depresión persistente, diagnóstico DSM-V, porque antes se diagnosticaba como duelo patológico. Agrega, que todo se evalúa de acuerdo a las esferas dañadas de la vida del paciente y ella empezó a buscar apoyos de la familia, tanto para que le cuidaran a la hija, porque ella tuvo que entrar a trabajar. La familia nuclear, tanto Paola como su hija, están en un constante estado depresivos, lo que impide que la menor se desarrolle con mayor confianza en su jardín, genera retraimiento y aislamiento social y familiar en Paola, estrés, desanimo, mal dormir, está dañada su identidad, hablamos de autoestima, seguridad, auto concepto, límites internos dañados, que cualquiera la puede pasar a llevar. Le recomendó consulta con psiquiatras, porque su cuadro depresivo es grave, paralelo con sus sesiones, lo que no se pudo llevar a cabo por los problemas económicos.

Que, es evidente el daño o perjuicio que experimentó su paciente, rotundamente. No hay dudas, porque en la primera sesión no tuvo que aplicar tez, porque no se justificaban, por las condiciones que se presentaba la paciente.

Indica, que es un cuadro que se caracteriza, por un bajo animo melancólica, por la persona por más de 6 meses, con sistemas atípicos, otros síntomas asociados, pérdida de la energía vital, anhedonia, aislamientos, insomnio. La gravedad del cuadro va estar relacionado con otros síntomas, como ideación suicida y el impacto en las otras esferas de su vida, que sería lo social, en los aislamientos, personal, familiar y que las tiene todas dañada.

Que, en sus análisis y concepto técnicos de la ciencia que procesa, un trastorno depresivo persistente grave, si constituye daño o perjuicios, porque una persona, no puede vivir tranquila, ni una buena calidad de vida personal ni social.

Que, el informe psicológico que se le presenta materialmente a su vista en este acto y que obra en autos C-855-2018, folio 104, es de su autoría y reconoce la firma y timbre estampado al pie del mismo. Agrega, que es difícil cuestionar que no exista daño, por la pérdida de un cónyuge, son años de reparación, es



directamente relacionado con la pérdida de un ser querido. Paola, tiene rasgos dependientes, le cuesta desligarse de las cosas y ahora lo tuvo que hacer a la fuerza. Por lo que es directamente relacionado el accidente con fallecimiento a las patologías, hay daño en el sentido realidad, por el accidente, son síntomas inmediatos y con el paso del tiempo, se van desarrollando otros sistemas, pero a raíz de lo mismo, en este caso el accidente con fallecimiento.

Que, dado sus conocimientos técnicos en psicología y por su expertis en los tratamientos de muchos otras varias consultas psiquiátricas, como el de autos, es o no, evidente y no cabe lugar a dudas, que el daño diagnosticado consecuencia del fallecimiento del cónyuge y padre de las demandantes de autos. Que, por lo menos unos 30 casos de este tipo o de aspectos depresivos a diagnosticado.

**Décimo segundo:** Que, con fecha 28 de junio de 2019, **se recepcionó** **oficio de Carabineros de Chile, Prefectura de Cautín**, mediante el cual se adjuntó copia del informe técnico 36-A-2014, elaborado por dicha Unidad.

**Décimo tercero:** Que, con fecha 2 de julio de 2019, **se recepcionó** **oficio N° 378-2019 de Instituto de Seguridad del Trabajo**, mediante la cual se remitió copia de Resolución N° 015 CUN N° 2328328 de 21 de abril de 2014, por el que se otorgan a los derecho habientes de don David Antonio Villalobos Rivera, cédula de identidad N° 13.376.582-4 las prestaciones económicas de la Ley N° 16.744.

Asimismo, se acompaña Informe sobre beneficios de la Ley N° 16.744 otorgados a los derechos habientes del señor Villalobos, hasta el mes de junio del año 2019.

Por último, hace presente que la mutualidad no maneja información referida a beneficios que pudiesen estar percibiendo los supervivientes del trabajador fallecido, ajenos a la misma.

**Décimo cuarto:** Que, con fecha 22 de julio de 2019, **se recepcionó** **oficio N° 2126, proveniente del Ministerio Público, fiscalía local de Traiguén**, mediante la cual se adjuntó la carpeta investigativa RUC 1400308529-6.

**Décimo quinto:** Que, con fecha 5 de septiembre de 2019, **se recepcionó** **oficio N° 242-2019, proveniente del Servicio Médico Legal de la Región de la Araucanía**, mediante el cual se envía protocolo de autopsia IX-TMC-159-2014, informe toxicológico TT428-430/2014, e informe de alcoholemia N° 1958/2014.

**Décimo sexto:** Que, con fecha 13 de septiembre de 2019, **se recepcionó** **oficio N° 229, proveniente de Carabineros de Chile, el cual indica que los números enviados, no corresponden.**

**Décimo séptimo:** Que, con fecha 29 de noviembre de 2019, se recepcionó oficio proveniente de Carabineros de Chile, **tenencia Capitán Pastene, Lumaco**, en el cual se informa que dado el tiempo transcurrido 2014 a 2019, los documentos solicitados fueron incinerados.

**Décimo octavo:** Que, con fecha 4 de febrero de 2030, se recepcionó **oficio del 22° Juzgado Civil de Santiago**, mediante el cual se adjuntó la causa Rol 27883-2014, caratulados "Salazar con Transportes Alberto Díaz Parraguez Limitada", ordinario de mayor cuantía, materia indemnización de perjuicios, recepcionando las copias autorizadas de las siguientes piezas; La demanda; Contestación de la demanda; Réplica; Sentencia definitiva; Recurso de casación y apelación; Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y Escritura pública de transacción de fecha 12 de febrero de 2019, como fuere ordenado por resolución de fecha 4 de septiembre de 2019.

**Décimo noveno:** Que, con fecha 17 de febrero de 2020, se recepcionó **oficio N° 573, de la Prefectura de investigaciones de accidentes en el tránsito**, mediante el cual se adjuntó informe técnico N° 09-8-2014, en el cual se



concluye que del Peritaje Técnico Mecánico realizado a los móviles; El móvil DPJY-92 traccionando al móvil JC8492 impactó en el lateral derecho de su estructura al móvil CCRC-98; daños atribuibles a su participación en un accidente de tránsito del tipo volcamiento, además, ninguno de los móviles periciados presentaba fallas en sus sistemas anteriormente al impacto, descartándose una falla mecánica.

En cuanto al informe técnico adjuntado N° 21-8-2014, en éste se concluye que del análisis realizado a las pautas de mantenimiento por el Ingeniero Mecánico que suscribe se concluye que según las fojas revisadas, el vehículo presentaba todos sus mantenimientos periódicos, realizados en los talleres de la Empresa. Que, no obstante, el problema que presentó el móvil al momento del accidente fue un uso excesivo del sistema de frenos, por lo cual generó la cristalización de los elementos de frenado.

**Vigésimo:** Que, expuestos los antecedentes probatorios corresponde al tribunal emitir un pronunciamiento en relación al **fondo de la acción deducida.**

Que, conforme se ha expuesto las demandantes doña Paola Roxana Parra Contreras y Emilia Belén Villalobos Parra, menor de edad, representada por su madre, han interpuesto en primer término acción principal de **indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual** en contra de **TAD SpA**, representada por don Fernando Ramón Díaz Contreras, y/o don Jaime Roberto Vilajuana Rigau, en su calidad de continuadora legal de la empresa de Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad limitada E.I.R.L., del giro de su denominación, Rut N° 76.412.470-7, en su calidad de mero tenedor del vehículo Tracto camión, marca Freightliner, modelo CL 112, color Blanco, año 2012, placa patente DPJY92-2; y solidariamente y/o subsidiariamente y/o simplemente conjunta, según en derecho corresponda, **en contra** de doña **María Silvia del Rosario Contreras Romo**; de don **Marcelo Antonio Díaz Contreras**; de don **Fernando Ramón Díaz Contreras**; de don **Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras**; y doña **Sylvia Valericia Díaz Contreras**, estos últimos en su calidad de herederos y a prorrata de sus cuotas hereditarias en la sucesión del causante don **Alberto Ramón Díaz Parraguez**, quien era propietario del Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3.

Que, han fundamentado su pretensión señalando que el día miércoles 27 de marzo del año 2014, siendo las 2:00 de la madrugada, el cónyuge y padre de las actoras respectivamente, don **David Antonio Villalobos Rivera**, recibió una llamada de su jefe quien le solicitaba presentarse a su trabajo en la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. para efectuar un procedimiento de evaluación de conducción vigilada, consistente en ir evaluando al conductor de un camión durante la conducción del transporte de carga, la empresa se dedica al transporte de carga peligrosa (combustible) para terceros en este caso, Petrobras. Expresan que, el señor Villalobos era el prevencionista de riesgo de la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. y se encargaba de toda la zona sur donde operaba la empresa por lo que era común que lo llamaran a diversas horas para pedirle que se presentare de inmediato a la empresa. Que, al llegar a la empresa se le informó que efectuaría un procedimiento de evaluación de conducción vigilada al conductor Sr. José Luis Saldivia Opazo, quien conduciría el Tracto camión, cuyo mero tenedor era Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. que llevaría el combustible en el Semi remolque, la carga se transportaría desde la comuna de Talcahuano a la comuna de Lumaco en la Novena Región del país. Señala, que, cerca de las 7 am



del día 27 de marzo de 2014 el señor Villalobos se dirigió junto al conductor a la comuna de Lumaco, transportando gran cantidad de combustible y que aproximadamente a las 9:45, en la Ruta CH-90, el conductor perdió el control de los mismos producto a su gran velocidad y a la mala utilización de los frenos y se volcaron impactando a la retroexcavadora, placa patente CCRC-98, operada por don Gabriel David Robles Bizama quien se encontraba trabajando en un terreno particular adyacente a la berma del camino.

Que, producto del accidente falleció, entre otros, el señor David Villalobos Rivera, estableciéndose como la causa de muerte de acuerdo al certificado de defunción, un traumatismo encéfalo craneano abierto con pérdida de masa encefálica/accidente de tránsito.

Expresa, que producto del fallecimiento del señor Villalobos, las actoras, doña Paola Parra y su hija Emilia, sufrieron daños, los cuales hace consistir en **lucro cesante**, fundándolo en que de conformidad a las cotizaciones previsionales durante los últimos seis meses de trabajo el Sr. Villalobos percibió una remuneración mensual de \$780.000.- pesos aproximadamente, por lo que debido a la muerte del Sr. Villalobos éste y su familia dejaron de percibir la suma de **\$271.440.000.- pesos**.

Expone, asimismo, que sufrieron **daño moral**. Que, doña Paola Parra, lo atribuye a que su vida familiar y personal se vio truncada, lo que le ha causado un profundo dolor físico y psicológico, solicitado por concepto indemnización de daño moral a su favor, asciende a la suma **\$300.000.000.-**

Que, respecto a Emilia Belén, expresa que fue muy apegada a su padre, y como consecuencia de su fallecimiento, vio afectado su desarrollo emocional, solicitado por concepto indemnización de daño moral, asciende a la suma de **\$400.000.000.-**

Que, **en subsidio** de lo anterior, y para el improbable caso que no se acoja la demanda interpone **demandas de indemnización de perjuicio** en contra de TAD SpA, representada por don **Fernando Ramón Díaz Contreras**, y/o don **Jaime Roberto Vilajuana Rigau**, en su calidad de continuadora legal de **Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad limitada E.I.R.L.**, fundado en su responsabilidad extracontractual derivada de su condición de empleador del conductor del Tractocamión y semirremolque de autos Sr. José Luis Saldivia Opazo, como empleado de la empresa de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. Funda su acción en que el conductor del vehículo involucrado en el accidente era dependiente de la demandada.

Indica, que la causa del accidente es el exceso de velocidad con que conducía el Sr. Saldivia y su mal utilización de los frenos del vehículo. Agrega, que el conductor no habría estado capacitado para conducir un vehículo de las características del involucrado en autos, cuestión que correspondía supervigilar al propio demandado. Agrega, que los daños sufridos por sus representadas y los montos que se demandan son los mismos señalados precedentemente el que se da por expresamente reproducido.

Que, por su parte la demandada al **contestar la demanda, solicita su rechazo**, indica que la demanda de autos, tanto la principal como la subsidiaria, se fundamentan en dos sistemas de atribución de responsabilidad extracontractual, el primero contenido en la Ley N° 18.290, que desarrolla en la “culpa contra la legalidad” y el segundo se sustenta en la responsabilidad civil del empresario por el hecho de sus dependientes.

Expone, que en cuanto a la solidaridad y a la transformación de la empresa transportes Alberto Díaz Parraguez, empresa individual de responsabilidad limitada a





una sociedad por acciones, ambos tipos de empresas son esencialmente distintas, tanto por su estructura como por su composición, y se trata de empresas respecto de las cuales surgen diversos efectos.

Expresa, que TAD SpA se ha constituido como continuadora legal de la primera, y que ésta transformación habría producido un efecto legal determinante. Agrega, a lo anterior que la solidaridad es de derecho estricto, sólo puede surgir en virtud de la convención, del testamento y de la ley y que la responsabilidad solidaria del artículo 169 de la Ley N° 18.290, quedaría establecida al momento de producirse el accidente que motiva dicha responsabilidad, además de cumplirse el resto de los requisitos legales. Aduce, que TAD SpA, sólo podría comparecer como una eventual deudora conjunta, cuestión que trae como efecto, que los montos demandados, necesariamente deben distribuirse, según el número de responsables llamados por la ley. Agrega, que atribuir toda la responsabilidad a su representada, configuraría una exclusión de responsabilidad del conductor que en éste caso se ve representado por sus herederos, cuestión que reafirma en definitiva que la obligación que se persigue es única y solamente conjunta.

Añade, en cuanto al arrendamiento del vehículo y la falta de legitimación pasiva, en el caso de autos, la parte demandante para dirigirse en contra de la demandada, debe acreditar que el vehículo se entregó en arrendamiento con opción de compra, en forma irrevocable y cuya inscripción en el registro de vehículos motorizados se haya solicitado con antelación al accidente, en caso contrario, responde el propietario del vehículo.

Que, el propietario sólo podría eximirse de responsabilidad si ha dado cumplimiento a las exigencias del mencionado inciso 6° del artículo 169 de la Ley N° 18.290. Que, si el propietario del vehículo no ha dado cumplimiento a tales exigencias, entonces éste sería eventualmente el responsable, liberando de toda responsabilidad al arrendatario.

Que, en cuanto a la **responsabilidad de la Ley N° 18.290**, haciéndola aparecer como responsabilidad estricta de la empresa a todo evento, expresa, que eso no es así, pues el legislador no exime al actor de probar todos los elementos que hacen surgir la responsabilidad civil extracontractual. Agrega, que la conducta del autor del daño requiere ser apreciada y más aún resultaría necesaria dicha apreciación, puesto que aun existiendo una obligación de cuidado impuesta por la ley o el reglamento, aquello no determina per sé la responsabilidad civil, como lo sostiene al demandante. Que, la mera infracción de una norma de la ley de tránsito no establecería a todo evento la responsabilidad del autor del daño, ya que es necesario para el nacimiento de responsabilidad por dicha infracción, ésta debe estar en relación de causa a efecto.

Que, en cuanto al exceso de velocidad, indica que se habría invocado por la demandante como elemento indiscutible de acreditación de la velocidad del móvil, el informe técnico 36-a-2014.- Que, sobre el informe, debería ser sometido al escrutinio de su parte, en función del principio de bilateralidad de la audiencia. Alega, la demandada que fundamentar el exceso de velocidad en un tacógrafo digital instalado por la empresa o a petición de ésta y programado para registrar la velocidad en forma intermitente y otros antecedentes no resultaría concluyente, menos si el informante del que se valió el investigador o autor del informe, nunca mencionó que el camión venía a exceso de velocidad cuando lo observó unos instantes previos al accidente.

Que, en cuanto a la cristalización del sistema de frenos, expresa que no sólo puede producirse por reiteradas acciones de frenaje, sino que también puede producirse frente a un evento único de frenaje, más aun cuando se trata de un vehículo de



un considerable peso. Este punto tendría, a su parecer, relevancia, pues los hechos se construyen, sobre la base de reiteradas acciones de frenaje, cuestión que permite entender los hechos desde otra dinámica. El informe técnico no se refiere a ésta posibilidad ni siquiera descartándola, lo que implica la falta de rigurosidad técnica del mismo, ya que una hipótesis distinta de frenaje, puede desembocar en una dinámica, también distinta, del accidente y alterar de esa forma la verdadera causa basal del accidente.

Que, en cuanto a la falta de legitimación activa, aduce que al no haber ejercido la acción como sucesión hereditaria, las demandantes no tendrían legitimación activa para demandar por éste concepto, puesto que no son ellas las que han dejado de percibir una ganancia, por lo que no pueden ejercer una acción a título personal, si ésta ni siquiera está en su patrimonio, y por ésta razón debe ser desestimada la demanda en éste concepto.

Arguye, que el fundamento para rechazar la demanda por éste concepto, viene dado por el alto grado de indeterminación que plantea la contraria en relación al lucro cesante. Agrega, que el cálculo del lucro cesante es expuesto como una línea continua exenta de todo factor vivencial, de costos y ahorros, consideraciones tales como el gasto necesario para producir la renta, los impuestos que se dejan de pagar, el cambio de actividad, una probable invalidez, los beneficios que resultan del fallecimiento, seguros involucrados, separación de hecho, aunque suene como un cálculo frío, pero si se trata de reparación, estos factores concurren a efectos de establecer un daño de ésta naturaleza.

Que, se debe estar de acuerdo en que la indemnización de perjuicios por daño moral es de carácter reparatorio y en ese sentido cobra vigencia el concepto de proporcionalidad que debe evitar que la indemnización pase de ser una reparación a un enriquecimiento sin causa. Agrega, que la indemnización por daño moral debiese recoger y reconocer como satisfacción resarcitoria, el pago que reciben las víctimas por rebote por una vía distinta a la demanda de indemnización de perjuicios.

Expone, que otro factor reconocido y aplicado por la jurisprudencia dice relación con la exposición de la víctima al daño, ya sea por acción o una omisión. Que, para el caso que estimara que existe responsabilidad civil de su representada en los hechos por los cuales se ha accionado, debiese sujetarse a reducción la indemnización por daño moral, pues en ella se debe considerar la omisión del sr. Villalobos en el cumplimiento de sus funciones. Agregando que el señor Villalobos, en el marco de sus funciones, y en especial en el cumplimiento del cometido en la “conducción vigilada” debió controlar y advertir al conductor el cumplimiento irrestricto de las normas de seguridad asociadas a la conducción.

Que, haciéndose cargo de la **acción subsidiaria deducida por la contraria**. Indica, que el actor ha deducido acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, fundado en el artículo 2320 del Código Civil.

Expone, que la norma del artículo 2320 consagra la responsabilidad civil del empresario por el hecho de sus dependientes, lo que en doctrina se denomina “culpa in eligendo y el vigilando”. Que, en este caso el empresario no respondería por la culpa del dependiente, sino que por su propia culpa, en efecto, el empresario responde por su propia culpa al elegir, vigilar, dirigir y controlar al empleado que directa o inmediatamente causó el daño respectivo. Indica, que este sistema de atribución de responsabilidad descansaría sobre el supuesto de que el empresario no cumplió adecuadamente con el cuidado debido atendida la autoridad que ejerce.



Refiere, que la demandada ha actuado con plena diligencia en las etapas de organización de la seguridad de su industria, ejerciendo todas las acciones de cuidado que su autoridad le confieren y sin embargo no ha podido impedir el daño, razón por la cual no sería responsable del daño demandado, de conformidad con el instituto de la prueba liberatoria contenido en el artículo 2320 del Código Civil.

Que, en cuanto a la **acción dirigida a los herederos de don Alberto Díaz Parraguez**, ya individualizados en autos, señala que respecto de estos también solicita el rechazo de la demanda de autos en todas sus partes.

Funda la solicitud de rechazo en el hecho que la contraria en una interpretación extensiva que hace del concepto de vehículo para los efectos de la responsabilidad solidaria que podía recaer en relación al carro de arrastre o semi remolque de propiedad del causante don Alberto Díaz Parraguez, es improcedente. Alega, que se produciría una falta de legitimación pasiva respecto de todos y cada uno de sus representados pues sería la ley la que asigna la solidaridad al dueño del vehículo motorizado y no de cualquier vehículo. Que, asimismo, se demostraría por el hecho que era la empresa transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. la que tenía la mera tenencia del vehículo a título de comodato, pues su uso fue destinado a las actividades de la citada empresa.

**Vigésimo primero:** Que, conforme a las pretensiones de las partes se establecieron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1.- Efectividad de haber ocurrido el accidente relatado en demanda. Hechos y circunstancias que lo acreditarían; 2.- Responsabilidad de los demandados en los hechos que se le imputan. Hechos y circunstancias que lo acreditarían; 3.- Efectividad de existir perjuicios. Monto y naturaleza de los mismos. Hechos y circunstancias que lo acreditarían; 4.- Relación de causalidad entre los hechos imputados y los perjuicios alegados. Hechos y circunstancias que lo acreditarían; 5.- Efectividad que los demandados carecen de legitimación pasiva. Hechos y circunstancias que lo acreditarían; 6.- Efectividad que las demandantes de autos han sido y son beneficiarias de indemnizaciones que nacen producto del fallecimiento de don David Antonio Villalobos Rivera. Monto y naturaleza de los mismos. Hechos y circunstancias que lo acreditarían; 7.- Efectividad que la víctima, don David Antonio Villalobos Rivera, se expuso al daño, ya sea por acción u omisión. Hechos y circunstancias.

**Vigésimo segundo:** Que, previo a entrar al fondo de la cuestión debatida en la demanda principal sobre responsabilidad extracontractual interpuesta por doña Paola Parra Contreras y Emilia Villalobos Parra en contra de TAD SpA, en su calidad de mero tenedor del vehículo Tracto camión, y en contra de los herederos de don Alberto Ramón Díaz Parraguez, quien era propietario del Semi remolque, corresponde analizar la **falta de legitimación activa** de las demandantes, conforme fuera alegado por las demandadas.

Que, la calidad de la acción dice relación con que ésta debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada, es decir, las partes en la relación jurídica sustancial. Que, en consecuencia la legitimación es el elemento que permite determinar quién es el legítimo portador del derecho invocado, legitimación activa, y contra quien puede legítimamente ejercerse ese derecho, legitimación pasiva.

Que, la falta de legitimación activa, en términos simples implica que la acción deducida en estos autos haya sido dirigida por quien no tiene la facultad para accionar. Que, la falta de legitimación que alega la demandada, se fundamenta en que habría una confusión de la acción de indemnización por lucro cesante, pues si bien la indemnización de perjuicios por daño moral es una acción ejercida por daño



reflejo o por rebote, esto implica que la misma está radicada en quienes sufrieron el daño, pero como acción personal y no por el daño sufrido por la víctima directa. Agrega, que al no haber ejercido la acción como sucesión hereditaria, las demandantes no **tienen legitimación activa para demandar** por éste concepto.

Que, en la presente causa se ha interpuesto acción de indemnización de perjuicios por doña **Paola Roxana Parra Contreras**, y **Emilia Belén Villalobos Parra**, como cónyuge e hija de don David Villalobos, fallecido en el accidente que motiva el presente juicio.

Que, la alegación de la demandada radica en que las actoras no tendrían legitimación activa para demandar el ítem indemnizatorio de lucro cesante. Que, a este respecto es dable señalar que doña Paola Parra Contreras ha comparecido en su calidad de cónyuge de don David Villalobos, quien falleciera en el accidente, y Emilia en su calidad de hija, menor de edad, demandando con motivo de las acciones interpuestas, una serie de ítems indemnizatorios, entre ellos el lucro cesante, que en tal sentido se estima que ambas se encuentran legitimadas, a fin de interponer la acción y alegar los ítems indemnizatorios, sin perjuicio de lo que se resuelva, con motivo del fondo de la acción deducida, **motivo por el cual se niega lugar a la alegación consistente en la falta de legitimación activa.**

**Vigésimo tercero:** Que, asimismo, las demandadas alegan en su escrito de contestación, la **falta de legitimación pasiva**, lo que corresponde resolver, previo a entrar al fondo de la acción deducida.

Que, las demandadas fundamentan tal alegación, señalando que del mérito de los antecedentes expuestos en la demanda, no se dan todos y cada uno de los requisitos del artículo 169 inciso 6 de la Ley N° 18.290, por lo que el actor debió dirigir su acción en contra del propietario del vehículo, pues su representada ni su antecesora aparecen como sujetos pasivos de la acción de autos, por no cumplirse los requisitos exigidos por la ley.

Que, a fin de establecer la eventual falta de legitimación pasiva de la demandada, se debe tener en consideración lo dispuesto en el artículo 169 inciso 6 de la Ley N° 18.290 que establece que **la responsabilidad civil del propietario del vehículo será de cargo del arrendatario del mismo cuando el contrato de arrendamiento sea con opción de compra e irrevocable y cuya inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados haya sido solicitada con anterioridad al accidente.** En todo caso, el afectado podrá ejercer sus derechos sobre el vehículo arrendado.

Que, las demandadas expresan que entendiendo que el empresario del leasing participa del riesgo de la industria del tráfico rodado, es que su responsabilidad no ha sido excluida de un accidente de tránsito, por ello, el arrendatario del vehículo sólo será responsable de los daños que se ocasionen con el vehículo arrendado, cuando éste o su tenencia cumpla con los requisitos a que alude el inciso 6 del artículo 169 de la Ley de Tránsito. Que, el arrendatario se ve excluido de responsabilidad civil, asumiendo ésta el propietario, cuando no se cumplen las exigencias de la norma referida.

Que, en estos autos, la demandante acompañó **la protocolización del contrato de arrendamiento con opción de compra**, celebrado entre Banco Itau Chile y Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, con fecha 31 de enero de 2012, y **el contrato de arrendamiento** celebrado entre las mismas partes, con fecha 20 de enero del mismo año, mediante el cual se estipuló en su **cláusula primera**, que con el propósito exclusivo de celebrar el presente contrato, y por instrucciones de la propia arrendataria, la arrendadora adquirirá para sí, de acuerdo con la selección y especificaciones hechas



por la parte arrendataria, el bien mueble que se detalla a continuación al proveedor que se indican: Cantidad de bienes: 01, Proveedor Comercial Kaufman S.A; Precio Total 97.250,00 US\$ valor unitario más IVA; descripción: Tractocamión Marca Freightliner Modelo CL 112 año 2012 nuevo y sin uso.

Que, expresa en su **cláusula décima**, responsabilidad de la parte arrendataria. Riesgo de destrucción, pérdida y/o deterioro. Sin perjuicio de los seguros, **el arrendatario** en virtud del presente contrato, asume y soporta los riesgos de pérdida o daño de los bienes, cualquiera que sea la causa a que respondan y sin limitación alguna, incluido el caso fortuito y aun cuando ellos provengan de defectos de fabricación o funcionamiento de los mismos. El arrendatario asume también los riesgos por cualquier accidente producido de la posesión, utilización u operación de los bienes arrendados que ocasione daños en las personas o en los bienes de terceros, los que serán de su entera y exclusiva responsabilidad, **eximiéndose Banco Itaú Chile y sus representantes legales de cualquier responsabilidad por dicho concepto.**

Que, asimismo, se **acompañó el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M.**, de fecha 23 de abril de 2014, N° de inscripción DPJY.92-2, tipo de vehículo Tractocamión, año 2012, marca Freightliner, modelo CL 112, datos del propietario Banco Itaú Chile. Que, en las limitaciones al dominio, aparece el **título de mera tenencia**, a nombre de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L, Rut 76.412.470-7, tipo de documento escritura pública, naturaleza del acto, Leasing, fecha 31 de enero de 2012, repertorio Alameda, número 110288 de fecha 09 de marzo de 2012.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 inciso 6 de la Ley N° 18.290 Ley de Tránsito, se exige que para que la responsabilidad civil del propietario del vehículo sea de cargo del arrendatario, la inscripción del contrato con opción de compra en el Registro de Vehículos Motorizados, debe ser anterior al accidente. Que, del mérito del **certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M.**, emitido con fecha 23 de abril de 2014, consta la inscripción de la **mera tenencia** desde el 9 de marzo de año 2012, en cuya naturaleza del acto figura un Leasing, que es un contrato de arrendamiento con opción de compra, a nombre de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L, Rut 76.412.470-7.

Que, en consecuencia, habiéndose inscrito el contrato con opción de compra, con fecha 9 de marzo de 2012, fecha anterior a la del accidente, hecho ocurrido el 27 de marzo de 2014, se concluye que se cumple con el requisito exigido por el artículo 169 inciso 6 de la Ley N° 18.290, en cuanto indica que para que la responsabilidad civil del propietario Banco Itaú Chile, sea de cargo del arrendatario, Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L, Rut 76.412.470-7, debe estar inscrito el contrato de arrendamiento con opción de compra con anterioridad al accidente, **motivo por el cual se negará lugar a la alegación de falta de legitimación pasiva.**

**Vigésimo cuarto:** Que, asimismo corresponde analizar la alegación de la demandada, consistente en que la responsabilidad solidaria contenida en el artículo 169 de la Ley N° 19.290, **no se ha transmitido de la Empresa de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L a TAD SpA.**

Que, funda su alegación en que la solidaridad es de derecho estricto, que sólo puede surgir de la convención, del testamento y de la ley, y que en el caso de autos si bien es cierto, que TAD SpA se ha constituido como continuadora legal de la primera, Empresa de Transporte Alberto Díaz Parraguez EIRL, no es menos cierto que ésta transformación habría producido un efecto legal determinante, esto



es, que al desaparecer la empresa individual de responsabilidad limitada, transformándose en una sociedad por acciones, no ha tenido la virtud de transmitir la solidaridad, no configurándose los supuestos establecidos en el artículo 1511 del Código Civil, norma que dispone que en general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o insólidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.

Agrega, que la responsabilidad solidaria del artículo 169 de la Ley N° 18.290, quedó establecida al momento de producirse el accidente que motiva dicha responsabilidad, y que a la época del accidente, tal solidaridad estaría dirigida al propietario o mero tenedor del vehículo involucrado en el accidente y al momento en que se produce éste.

Que, fin de dilucidar si a la demandada TAD SpA, se le ha transmitido o no la eventual responsabilidad solidaria establecida en el artículo 169 de la Ley N° 18.290, se ha tenido en consideración la inscripción del extracto efectuado en el Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, acompañado por la parte demandante, de cuyo mérito aparece que la Empresa Transporte Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L, con fecha 15 de septiembre de 2016, inscribió a fojas 108 número 100 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Casablanca un extracto, que en su cláusula segunda expresa:

**“Transformación.** A) se transforma la expresa individual de responsabilidad limitada ya individualizada, cuyo nombre es Transporte Alberto Díaz Parraguez, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L, **en una sociedad por acciones denominada TAD SpA.**

Que, en dicho extracto no se señala cláusula alguna en relación a la transmisibilidad de la responsabilidad de la primera, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada a la segunda, Sociedad Por Acciones, ni tampoco que se le haya puesto término a la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Que, en tal sentido el artículo 14 inciso 2 de la Ley N° 19.857, que regula la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada expresa que una empresa individual de responsabilidad limitada podrá transformarse en una sociedad de cualquier tipo, cumpliendo los requisitos y formalidades que establece el estatuto jurídico de la sociedad en la cual se transforma.

Que, el artículo 15 de la misma ley preceptúa que la empresa individual de responsabilidad limitada terminará: a) por voluntad del empresario; b) por la llegada del plazo previsto en el acto constitutivo; c) por el aporte del capital de la empresa individual a una sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16; d) por dictarse la resolución de liquidación, o e) por la muerte del titular. Los herederos podrán designar un gerente común para la continuación del giro de la empresa hasta por el plazo de un año, al cabo del cual terminará la responsabilidad limitada. **Cualquiera que sea la causa de la terminación, ésta deberá declararse por escritura pública, inscribirse y publicarse con arreglo al artículo 69.** En el caso de la letra e), corresponderá a cualquier heredero declarar la terminación; excepto si el giro hubiere continuado y se hubiere designado gerente común, pero, vencido el plazo, cualquier heredero podrá hacerlo. Valdrán los legados que el titular hubiere señalado sobre derechos o bienes



singulares de la empresa, los que no serán afectados por la continuación de ésta, y se sujetarán a las normas de derecho común. Las causales de terminación se establecen tanto en favor del empresario como de sus acreedores.

Finalmente el artículo 16 de la ley en análisis, estatuye que en el caso previsto en **la letra c) del artículo anterior, la sociedad responderá de todas las obligaciones contraídas por la empresa en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º**, a menos que el titular de ésta declare, con las formalidades establecidas en el inciso segundo del artículo anterior, asumirlas con su propio patrimonio.

Que, asimismo, el artículo 424 inciso 2 de la Ley N° 20.190 que regula la Sociedad por Acciones, estipula que la sociedad tendrá un estatuto social en el cual **se establecerán los derechos y obligaciones de los accionistas**, el régimen de su administración y los demás pactos que, salvo por lo dispuesto en este Párrafo, podrán ser establecidos libremente. **En silencio del estatuto social y de las disposiciones de este Párrafo, la sociedad se regirá supletoriamente y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas.**

Que, en el mismo orden de ideas el artículo 41 de la Ley N° 18.046, que regula las Sociedades Anónimas, abiertas, cerradas y especiales, dispone que los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios **y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables. Es nula toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la junta de accionistas que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los directores** a que se refiere el inciso anterior. La aprobación otorgada por la junta de accionistas a la memoria y balance presentados por el directorio o a cualquier otra cuenta o información general, no libera a los directores de la responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni la aprobación específica de éstos los exonera de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o ejecutado con culpa leve, grave o dolo.

Que, así las cosas, es preciso señalar que la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Transporte Alberto Díaz Parraguez EIRL, era la empleadora al momento del accidente de don David Villalobos Rivera, lo cual **consta del contrato de trabajo acompañado por la actora**, suscrito por don David Villalobos Rivera y la empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L. de fecha 04 de septiembre de 2006, de cuyo mérito se desprende en su **cláusula primera** que el trabajador se compromete a efectuar el trabajo de experto en Prevención de Riesgos y Funciones Generales de Administración del establecimiento de Transportes Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L, pudiendo ser trasladado a otro domicilio o labores similares, dentro de la ciudad, por causa justificado, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. Que, en **su cláusula cuarta**, el presente contrato tendrá duración indefinida y podrá ponérsele término cuando concurren para ello causas justificadas en conformidad a las leyes vigentes.

Que, de lo anteriormente expuesto, es dable señalar que consta en autos que la Empresa de Transporte Alberto Díaz Parraguez EIRL, efectuó una **transformación a una Sociedad por Acciones**, lo cual se encuentra facultado por ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 inciso 2 de la Ley N° 19.857. Que, analizado el extracto inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Casablanca y Concón, en nada se refieren a la responsabilidad que le atañe a la segunda, respecto de los hechos en que se ha visto involucrada la primera. En tal



sentido, es pertinente entonces analizar que dice la Ley respecto a las sociedades anónimas cerradas, toda vez que en silencio de los estatutos sociales de una Sociedad por Acciones, se aplica la normativa de la Sociedad Anónima Cerrada.

Que, el artículo 41 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedad Anónima, es claro al establecer que los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios **y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables.** Es nula toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la junta de accionistas que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los directores a que se refiere el inciso anterior. Que, en consecuencia, la Ley es clara en señalar que los directores responden solidariamente de los perjuicios causados.

Que, por lo anterior, es posible establecer que la transformación efectuada a la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, constituida al momento del accidente, **no es terminación de la misma,** toda vez que el artículo 15 de la Ley N° 19.857, indica de forma taxativa las formas en que una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada termina, y se deben cumplir ciertos requisitos para ello, lo cual en autos no acontece. Por lo que una transformación, no es sinónimo de desaparición o terminación de la empresa, más aun cuando conserva el Rol Único Tributario, la personalidad jurídica y el mismo giro.

Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto y de conformidad a las normas legales aludidas, se estima que aun cuando la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 169 de la Ley N° 18.290, queda determinada al momento de producirse el accidente, la empresa TAD SpA es la continuadora legal de la Empresa de Transporte Alberto Díaz Parraguez E.I.R.L, toda vez que, al no haberse puesto término, sino haber sido transformada conservándose su Rut, personalidad jurídica y mismo giro, nada obsta a que se pueda perseguir la eventual responsabilidad solidaria que ésta tendría, **motivo por el cual se procederá a rechazar la alegación, consistente en la intransmisibilidad de la eventual responsabilidad solidaria contenida en el artículo 169 de la Ley N° 18.290.**

**Vigésimo quinto:** Que, en cuanto a los herederos de don Alberto Díaz Parraguez, quien era propietario del Semi remolque, marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3, demandados en éstos autos, en su **calidad de herederos,** es dable señalar, que el artículo 169 de la Ley N° 18.290, expresa que el conductor, **el propietario del vehículo** y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son **solidariamente responsables** de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.

Que, el artículo 2 de la Ley N° 18.290, define vehículo como el medio con el cual, sobre el cual o por el cual toda persona u objeto puede ser transportado por una vía. Por lo anterior, se advierte que la Ley del Tránsito, considera al vehículo no sólo como el medio con o por el cual se transportan personas u objetos, sino también sobre el cual se transportan ellos, incluyéndose los acoplados que vayan adosados a un vehículo motorizado, en este caso el **Semi remolque,** marca Randon, modelo no registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3.

Que, en tal sentido es dable señalar, que las actoras acompañaron el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V-M, de fecha 23 de abril de 2014, mediante el cual aparece que el semi remolque marca Randon, modelo no





registrado, color Gris, año 2000, placa patente JC 8492-3, en dicha fecha era de propiedad de don Alberto Díaz Parraguez, quien falleció con fecha 18 de octubre de 2016, según aparece del **certificado de defunción de don Alberto Ramón Díaz Parraguez**, cédula nacional de identidad N° 5.237.035-3 emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Que, en consecuencia, al haberse concedido la posesión efectiva de don Alberto Díaz Parraguez mediante Resolución Exenta N° 26758 de fecha 29 de noviembre de 2016 e inscrita en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas bajo el N° 69475 del Registro Civil e Identificación correspondiente al año 2016, y al haber sido éste el propietario del semirremolque al momento del accidente, es posible dirigir la acción por la eventual responsabilidad extracontractual, en contra de sus herederos, toda vez que ellos son los continuadores jurídicos y patrimoniales del causante.

**Vigésimo sexto:** Que, dilucidado lo anterior corresponde entrar al analizar el fondo de la acción principal deducida, consistente en **la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual fundada en la responsabilidad derivada del artículo 169 de la Ley N° 18.290**, interpuesta por doña Paola Parra y Emilia Belén Villalobos, por el fallecimiento de su cónyuge y padre, como consecuencia del accidente acontecido el día 27 de marzo de 2014.

Que, a fin de determinar la procedencia de la misma, se debe analizar la prueba rendida respecto al primer y segundo hecho controvertido, ambos establecidos en la presente causa, esto es, efectividad de haber ocurrido el accidente y responsabilidad de los demandados en los hechos que se le imputan.

Que, en relación a la ocurrencia y forma del accidente se han agregado a la causa, los siguientes antecedentes probatorios: **Informes técnicos** emitidos por la Prefectura de Cautín, individualizados como N° 36-A-2014, 09-B-2013 y 21-B-2014, elaborados por la **Prefectura Cautín N° 22, Subcom. I.A.T. y Carrt. Cautin de Carabineros de Chile para la Fiscalía Local de Traiguen**, acompañados por la actora, de los cuales aparece lo siguiente:

1.- Informe Técnico N° **36-A-2014** de fecha 25 de julio de 2014, investigado y suscrito por don Juan Paredes Acevedo, Capitán de Carabineros y visado por don Iván Ketterer Lavandero Teniente Coronel de Carabineros, del cual se establece como causa basal del accidente, que el participante 1, debido al uso inadecuado del sistema de frenos producto del exceso de frenaje en una pendiente descendente, genera la cristalización del sistema y nula respuesta ante su requerimiento, por lo que al desplazarse por el desarrollo de la curva a la izquierda pierde el control y maniobrabilidad de los móviles 1 y 1A, volcando, y posteriormente por proyección impacta al móvil 2 el que posteriormente vuelca. Que, como infracción concurrente, se indica que el participante 1, **conduce el móvil a exceso de velocidad (83km/hr) en una zona restringida y señalizada de 30 km/hr.**

2.- Informe Técnico Pericial Mecánico N° **09-B-2013** de fecha 20 de abril de 2014, confeccionado por el Perito de Carabineros Samuel Rocca Brito, corregido por el Ingeniero Mecánico de Carabineros Omar Minguez Rivera y visado por Enrique Monras Álvarez Teniente Coronel de Carabineros; del cual aparece en el ítems 6, sistema de frenos, una nota, la cual indica que tambores de frenos izquierdos del segundo y tercer eje presentan cristalización, grietas y color azulino; tabor del segundo eje derecho presenta cristalización, grietas y color azulino; tambor de freno derecho del tercer eje presenta cristalización y color azulino, lo anterior es debido a **un excesivo uso el pedal de freno del tracto camión por**



un periodo de tiempo prolongado; y descartando así una falla mecánica en el sistema aludido.

Que, como conclusión del peritaje técnico mecánico realizado a los móviles, se expresa que el móvil DPJY-92 traccionando al móvil JC8492 impactó en el lateral derecho de su estructura al móvil CCRC-98; daños atribuibles a su participación en un accidente de tránsito del tipo volcamiento, además ninguno de los móviles periciados presentaba fallas en sus sistemas anteriormente al impacto, descartándose una falla mecánica.

3.- Informe Técnico Pericial Mecánico N° **21-B-2014** de fecha 09 de julio de 2014, confeccionado por el Perito de Carabineros e Ingeniero Mecánico de Carabineros Omar Mínguez Rivera y visado por Ignacio Toledo Campos, Capitán de Carabineros en el cual se concluye que del análisis realizado a las pautas de mantenimiento por el Ingeniero Mecánico que suscribe se concluye que según las fojas revisadas el vehículo presentaba todos sus mantenimientos periódicos, realizados en los talleres de la empresa. **No obstante el problema que presentó el móvil al momento del accidente fue un uso excesivo del sistema de frenos**, por lo cual generó la cristalización de los elementos de frenado.

Que, por su parte la demandada, acompañó **Informe Técnico del accidente por volcamiento Ruta R-90, Lumaco, de fecha junio 2018**; realizado por el Ingeniero en Transporte PUCV, Paulo Lucchini Traverso, del cual se concluye que del análisis de los vestigios del accidente y de las fotos tomadas el mismo día del siniestro, no es posible descartar la hipótesis que la retroexcavadora se encontraría movilizándose desde la calzada hacia el camino interior, ya que existirían fotos tomadas el mismo día del hecho, que muestran huellas de la retroexcavadora, desde la calzada, hacia el camino interior. Si bien los informes mecánicos son claros al afirmar que el accidente no se produce por causas mecánicas, se señala una posible cristalización de las balatas, sin embargo, ello no es consistente con la existencia de huellas de frenada, tanto del tractor como del remolque, que indican bloqueo de ruedas, esto es señal clara que los frenos funcionaron, por lo que la cristalización se tendría que haber producido en la fase final.

Que, concluye el informe, que el siniestro se produce por la reacción del conductor en una maniobra evitativa ante un evento inesperado, que no tiene relación con la curva, puesto que ha quedado demostrado que nunca supera la velocidad crítica, ni la velocidad de vuelco. Agrega, que la causa basal del accidente es el frenado intenso producto de la percepción de una situación de peligro detectada por el conductor, tal que reacciona aplicando frenos intensamente, perdiendo con ello la estabilidad lateral del semirremolque, producto de la transferencia de fuerza al eje delantero.

**Vigésimo séptimo:** Que, con la finalidad de establecer la **responsabilidad extracontractual** establecida en el artículo 169 de la Ley N° 18.290, que eventualmente tendrían los demandados en los hechos acaecidos, entendiéndose que para que ésta se configure supone acreditar los siguientes requisitos, a saber: a) que se cause un daño, b) que el hecho u omisión provenga del dolo o culpa, c) que entre ese hecho doloso o culpable y el daño exista una relación de causalidad, es decir, que el daño sufrido por la víctima se haya producido u ocasionado por una actuación u omisión de la demandada y d) capacidad, es necesario analizar dicha responsabilidad conjuntamente con la acción u omisión ilícita del agente, con culpa o dolo de su parte, considerando la íntima relación que existe entre ambos requisitos.

Que, en cuanto a la acción u omisión del agente, es menester señalar que la acción u omisión, en especial esta última, responde a un principio de la solidaridad



humana en virtud del cual se responsabiliza a un sujeto, quien es el que omite realizar una determinada prestación dirigida a salvaguardar un bien jurídico o a que no se impida la producción de un resultado típico estando obligado a ello. Que, a mayor abundamiento la omisión se refiere a aquellos comportamientos pasivos que producen consecuencias jurídicas, por esta razón no todo comportamiento pasivo es equivalente a una omisión, pues es necesario que tenga relevancia jurídica que sea necesaria reparar, por lo tanto una omisión culposa o dolosa traerá aparejada indudablemente la consecuencia jurídica de resarcir el daño provocado.

Que, en tal sentido aparece de los informes acompañados por la actora, singularizados como, Informes técnicos emitidos por la Prefectura de Cautín, individualizados como N° 36-A-2014, 09-B-2013 y 21-B-2014, elaborados por la Prefectura Cautín N° 22, Subcom. I.A.T. y Carrt. Cautin de Carabineros de Chile para la Fiscalía Local de Traiguen, que habría existido un **excesivo uso el pedal de freno del tracto camión por un periodo de tiempo prolongado**, y que dicha utilización produjo una cristalización de los frenos del mismo vehículo.

Que, asimismo, la demandada expresa que la cristalización de frenos no sólo puede producirse por reiteradas acciones de frenaje, sino que también puede producirse frente a un evento único de frenaje, más aun cuando se trata de un vehículo de un considerable peso.

Que, con la finalidad de establecer si la cristalización de los frenos establecida en los informes previamente descritos, se produjo por reiteradas acciones de frenaje, o frente a un evento único de frenaje, tratándose de un vehículo de un considerable peso, es preciso señalar que del mérito de la carpeta investigativa de la Fiscalía Local de Traiguén RUC 1400308529-6, **agregada a éstos autos, y guardada en la custodia del tribunal bajo el N° 2644-2019**, aparece un detalle histórico de mantenimientos del tracto camión DPJY-92, mediante el cual es posible advertir que hubo regulación de los frenos desde el día 2 de septiembre de 2013, y seguidamente el 12 de septiembre de 2013, 3 de enero y 20 de febrero de 2014, efectuándosele una regulación de frenos completa. Que así las cosas, es posible señalar que el vehículo ya presentaba problemas de frenos a lo menos desde el día 2 de septiembre de 2013, por lo que constantemente tuvo que efectuarse una regulación a los mismos.

Que, lo anterior concuerda con las **declaraciones prestadas ante la Fiscalía de Traiguén** en la causa penal RUC 1400308529-6, con fecha 06 de mayo de 2014, referente al accidente de autos, por don Aristóteles Miranda Escobar, de la cual aparece que es conductor de camiones en la Empresa Transportes Alberto Díaz Parraguez, desde hace ocho años, y que manejó el camión que tenían a cargo sus colegas José Bustos y José Luis Saldivia en donde se dio cuenta que el camión tenía problemas de aire, lo que hacía que los frenos no funcionaran perfectamente. Señala, que el señor Bustos y Saldivia, habrían informado esta situación a los jefes y colegas, quienes no dieron solución.

Que, lo anterior se encuentra conteste con la declaración prestada en la misma carpeta investigativa, por don Jorge Alberto Aguirre Madrano, quien indica desempeñarse como conductor de camiones en la Empresa Transporte Alberto Díaz Parraguez, desde hace 9 años, llevó a trabajar a su amigo José Luis Saldivia, quien manejaba un camión con una rampla la cual es PPU JC 8492 junto a don José Bustos, indica que él era conductor de relevo, la última vez que manejó el camión fue en febrero de 2014, en un viaje a Temuco, en donde se dio cuenta que la maquina presentaba problemas de freno, dejó una observación en la hoja de ruta además de decirle al Jefe de Taller don Oscar Díaz, quien se comprometió a revisar la maquia. Asimismo, en la declaración de don José Antonio Bustos



Riquelme, de fecha 6 de mayo de 2014, quien indica ser conductor de la Empresa de Transportes Alberto Díaz Parraguez, desde hace 8 años y medio, maneja hace dos años el camión PPU DPJY-92, en el cual se transportaba combustible, la rampla-estanco de ese camión tiene aproximadamente 14 años, es de año 2000. Que, respecto del camión indica ciertas fallas en el sistema de frenos, costaba para detenerlo, los frenos no respondían, eso hace como seis u ocho meses atrás, en la hoja de ruta hacían con su colega José Luis, observaciones, ya que la empresa contaba con mecánicos, pero el problema en los frenos continuaba a pesar de que informó muchas veces.

Que, asimismo, de la declaración de don Rubén José Campos Hidalgo, aparece que se habría enterado por José Bustos y José Saldivia, que desde hace seis u ocho meses, el camión presentaba problemas de frenos, que varias veces informaron a los Jefes de Operaciones y taller, pero ellos no solucionaban el problema. Y la declaración de don Patricio Rubén Elizalde Jofré, quien señala que las ramplas que utilizan los camiones son antiguas, algunas son hechizas y no le realizan mantenciones, ya que las mantenciones se realizan a los camiones, las que no se encuentran de buena manera. Respecto al camión que manejaba José Luis Saldivia, la rampla presentaba problemas de freno, eso lo sabe porque varias veces las manejó y porque José Luis y José Bustos le indicaron del grave problema que presentaba la máquina, situación que hicieron saber al Jefe de Operaciones don Pedro Muñoz y al Jefe de Taller, quien les dijo que en cuatro días reparaba la máquina, eso como seis meses antes del accidente, pero a pesar de eso el camión no paro, siguió en operaciones.

Que, en consecuencia, de las declaraciones antes citadas, aparece que el tracto camión, presentaba problemas con los frenos desde a los menos ocho meses antes del 27 de marzo de 2014, día del accidente, y que dichas circunstancias habían sido informadas a la jefatura correspondiente de la Empresa Transporte Alberto Díaz Parraguez EIRL. Que, el hecho previamente relatado, encuentra correlación con los informes N° 36-A-2014, N° 09-B-2013 y N° 21-B-2014, ya analizados, en donde se concluye que existiría una cristalización de los frenos producto del excesivo uso de pedal de freno.

**Vigésimo octavo:** Que, asimismo, del mérito del Parte Policial, acompañado por las demandantes, denominado fijación fotográfica N° 44 de fecha 27 de marzo de 2014 confeccionado por el Carabinero Jonathan Vera González del Reten de Carabineros de Lumaco, aparece que se pudo observar en terreno que al costado izquierdo de la vía, orientado de poniente a oriente, (Lumaco-Traiguén), entre un predio particular y la berma, se encontraban dos móviles pesados volcados, con sus respectivos conductores y acompañantes atrapados entre los fierros retorcidos de los vehículos, ignorando si mantenían signos vitales, constatándose por personal médico que ambos conductores y un tercero se encontraban fallecidos. Que, más adelante, consigna el mismo parte policial que en cuanto a trayectoria y desplazamiento, el tractocamión P.P.U. DPJY-92 y el semi-remolque P.P.U. JC-8492, se dirigía de oriente a poniente desde la comuna de Traiguén a Lumaco y debido a la extensa pendiente con curvas pronunciadas, sumada a ello a las **huellas encontradas en el sitio del suceso, el conductor pierde el control de esos móviles, saliendo de la calzada, volcándose e impactando a la retroexcavadora** de manera frontal, quedando esta última bajo el tracto camión y acoplado de este, donde pierden la vida en forma instantánea los tres ocupantes de los dos móviles descritos.

**Vigésimo noveno:** Que, las actoras expresan en su libelo que la eventual responsabilidad extracontractual de la parte demandada, nacería de la apreciación



de la conducta del autor del daño, siendo innecesaria si éste proviene de la violación de una obligación determinada impuesta por la ley o un reglamento, en este caso la Ley del Tránsito, constituyéndose lo que se denominaría **culpa contra la legalidad**.

Que, la culpa contra la legalidad se refiere a los casos en que una determinada actividad se encuentra reglada por el legislador, precisamente para evitar la producción de algún daño. Que, a consecuencia de ello, la responsabilidad de los demandados derivaría de lo establecido en el artículo 169 inciso 2 de la Ley N° 18.290, que señala que el conductor, el propietario del vehículo y el **tenedor del mismo a cualquier título**, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente, y el mismo artículo en su inciso 6 que dispone que la responsabilidad civil del propietario del vehículo será de cargo del arrendatario del mismo cuando el contrato de arrendamiento sea con opción de compra e irrevocable y cuya inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados haya sido solicitada con anterioridad al accidente. En todo caso, el afectado podrá ejercer sus derechos sobre el vehículo arrendado.

Que, del mérito de la prueba antes pormenorizada, en particular de los informes como **N° 36-A-2014, 09-B-2013 y 21-B-2014**, acompañados por la actora, elaborados por la Prefectura Cautín N° 22, Subcom. I.A.T. y Carrt. Cautin de Carabineros de Chile para la Fiscalía Local de Traiguén, aparece que habría existido un excesivo uso el pedal de freno del tracto camión por un periodo de tiempo prolongado, y que dicha utilización produjo una cristalización de los frenos del mismo vehículo. Asimismo, que se estableció como **causa basal** del accidente, que el participante 1, debido al uso inadecuado del sistema de frenos producto del exceso de frenaje en una pendiente descendente, genera la cristalización del sistema y nula respuesta ante su requerimiento, perdiendo el control y maniobrabilidad de los móviles volcando y **como infracción concurrente, se estableció que el conductor del móvil 1 conducía a exceso de velocidad (83km/hr) en una zona restringida y señalizada de 30 km/hr**.

Agrega, el informe Técnico Pericial Mecánico N° 21-B-2014 de fecha 09 de julio de 2014, que del análisis realizado a las pautas de mantenimiento por el Ingeniero Mecánico se concluyó que el vehículo presentaba todos sus mantenimientos periódicos, realizados en los talleres de la empresa. **No obstante el problema que presentó el móvil al momento del accidente fue un uso excesivo del sistema de frenos**, por lo cual generó la cristalización de los elementos de frenado.

Que, además, del mérito del parte policial, denominado fijación fotográfica N° 44 de fecha 27 de marzo de 2014 confeccionado por el Carabinero Jonathan Vera González del Reten de Carabineros de Lumaco, aparece que en cuanto a trayectoria y desplazamiento, el tractocamión P.P.U. DPJY-92 y el semi-remolque P.P.U. JC-8492, se dirigía de oriente a poniente desde la comuna de Traiguén a Lumaco y debido a la extensa pendiente con curvas pronunciadas, sumada a ello a las **huellas encontradas en el sitio del suceso, el conductor pierde el control de esos móviles, saliendo de la calzada, volcándose e impactando a la retroexcavadora** de manera frontal, quedando esta última bajo el tracto camión y acoplado de este, donde pierden la vida en forma instantánea los tres ocupantes de los dos móviles descritos.

Que, en consecuencia, teniendo en consideración que el tracto camión, **iba a una velocidad de 83 kilómetros por hora**, en una zona restringida, y **señalizada**



de 30 kilómetros por hora, sumado a ello que transitaba por una pendiente con curvas pronunciadas, lo cual produjo que el conductor perdiera el control del vehículo y aconteciera el accidente, latamente descrito en la presente sentencia, y teniendo en consideración que el artículo 169 de la Ley N° 18.290, hace solidariamente responsable al tenedor del vehículo de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, en la presente causa, los daños producidos en el accidente, el día 27 de marzo de 2014, al transitar a exceso de velocidad, **es dable concluir que la parte demandada tiene responsabilidad en el accidente producto del cual, falleció don David Villalobos, motivo por el cual se procederá a hacer lugar a la demanda principal por responsabilidad extracontractual interpuesta en contra de las demandadas, conforme a los perjuicios acreditados en autos.**

**Trigésimo:** Que, corresponde analizar si a consecuencia del accidente que motiva la presente causa, las demandantes sufrieron perjuicios.

Que, en tal sentido las demandantes, solicitan la suma de \$271.440.000.- por concepto de **lucro cesante**, debidamente reajustadas, según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor o el indicador que legalmente haga sus veces, entre la fecha del accidente de autos, y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. En subsidio para que sean condenados a la suma mayor o menor que se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que con esa misma base se determine.

Asimismo, solicitan se condene a la demandada a pagar a doña Paola Roxana Parra Contreras a la suma de \$300.000.000.- y a doña Emilia Belén Villalobos Parra la suma de \$400.000.000.- por concepto de **daño moral**.

**Trigésimo primero:** Que, en cuanto a los perjuicios demandados las actoras, han demandado el lucro cesante y daño moral.

Que, en cuanto al **lucro cesante**, la parte demandante lo hace consistir en que de no haber fallecido don David Villalobos y haber alcanzado su jubilación a los 65 años de edad, hubiere trabajado otros 29 años percibiendo por concepto de remuneración anual la suma de \$9.360.000.- pesos, por lo que debido a su muerte, su familia dejó de percibir la suma de \$271.440.000.-

Que, es dable señalar, que el **lucro cesante** hace referencia al dinero, a la ganancia, a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado, y el responsable será quien causó el daño o el perjuicio.

Que, las demandantes a fin de acreditar el lucro cesante y en particular la renta que percibía el señor Villalobos, acompañaron la cartola cronológica de la cuenta de capitalización emitida con fecha 29 de mayo de 2019 por AFP Habitat correspondiente a don David Villalobos Rivera, de la cual aparece que el señor Villalobos al mes del accidente, esto es marzo del año 2014, percibía como renta imponible la suma de \$755.125.-

Que, del mérito de la cartola singularizada previamente, si bien aparece que el señor Villalobos, ganaba la suma de \$755.125.- se estima que no se encuentra fehacientemente acreditado el monto efectivo que habrían dejado de percibir las actoras. Que, por lo anterior, **se estima insuficiente para tener por acreditado el monto de \$271.440.000.- demandado, motivo por el cual se procederá a rechazar este ítem indemnizatorio.**

**Trigésimo segundo:** Que, en cuanto al **daño moral** demandado, doña Paola Roxana Parra Contreras solicita la suma de \$300.000.000.- y Emilia Belén Villalobos Parra la suma de \$400.000.000.-



Que, el **daño moral**, es un concepto que no se señala en la ley, el legislador no le ha dado un tratamiento en particular a este tema, sino que, se deduce de lo expuesto en el artículo 2329 del Código Civil, el que dispone que, “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”. Como se aprecia del artículo este dice “todo daño”, incluyéndose dentro de todo daño el daño moral. Que, como el daño moral se deduce del referido artículo y no hay un concepto respecto a este tema, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de dar una definición a dicha expresión, debiendo entenderse por daño moral como el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Agrega que el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena ocasionada por el hecho dañoso. Este daño dice relación con un aspecto de la psicología del ser humano es un daño impalpable, su determinación resulta difícil, y más aún, su cuantificación.

Que, a fin de acreditar el daño moral, las actoras han acompañado prueba instrumental consistente en: 1.- **informe psicológico de doña Paola Roxana Parra Contreras** confeccionado por el psicólogo don Luis Antonio Tapia Macaya, cédula de identidad N° 16.284.409-1, con fecha 11 de noviembre de 2015; de cuyo mérito aparece que doña Paola, en relación al examen mental; su lenguaje es pertinente y asiste en medianas condiciones generales; en cuanto a su aspecto personal, considerando higiene, tiempo y orientación espacial. Principalmente, su sintomatología emocional caracteriza por sentimientos de tristeza, -rabia, vacío, culpa, angustia, devaluación personal e impotencia. Cognitivamente, observa ideación suicida. Conductualmente, tiene complicaciones para conciliar el sueño, pérdida de energía vital, anhedonia, cumplir con sus responsabilidades cívicas y sociales. Que, en cuanto al proceso Psicodiagnóstico. Pruebas Utilizadas y criterios de elección. Primordialmente entrevista. No se justifica por dudas diagnósticas ni por el estado emocional actual en el que se encuentra la paciente el uso de pruebas diagnósticas. Diagnóstico descriptivo DSM – 5, **Trastorno depresivo persistente grave**. En personalidad evitativo con rasgos dependientes. Hipótesis psicodinámica. El contenido latente, respecto del motivo de consulta, condensa experiencias tempranas de abandono y dependencia. Figuras parentales definidas e idealizadas quedan dañadas al momento de vivenciar la pérdida repentina de su cónyuge, en cuanto al motivo de consulta manifiesto se refiere. Desarrollando un cuadro adaptativo con sintomatología melancólica que sobrepasa las facultades de Paola, dañando sus relaciones familiares, cívicas e interpersonales. Se sugiere derivación a atención Psiquiátrica y Psicoterapia focalizada. Como resultado, se diagnostica **depresión persistente**; 2.- informe médico de fecha 04 de julio de 2014 elaborado por el DR. Aquiles Conexeros Pérez, Neuropsiquiatra, respecto de doña Paola Roxana Parra Contreras, en el cual se indica que la paciente se presenta el 20 de mayo de 2014 con antecedentes previos en un estado de desarrollo emocional y de conflictos no resueltos manifestado a partir de accidental falta de esposo el 27 de marzo de 2014 presentando opresión torácica precordial con respiración suspirosa y llanto recurrente asociado a altos niveles de angustia, cefalea, mareos, dificultad en la conciliación del sueño, despertar precoz con sensación de no haber dormido, cansancio físico-mental, contracturada, anhedonia, pérdida del control impulsivo, baja tolerancia a la ansiedad con respuestas psico-fisiológicas ansiosas e irritabilidad. Del área cognitiva se aprecia disminución de la atención y concentración focalizada preferentemente a una realidad distinta. La paciente efectúa tratamiento con intervención psicoterapéutica asociado a: Eszop 3 Mg= 1 en la noche; Nitexol 30 Mg.= 2 al día. En controles sucesivos se mantiene tratamiento presentando



desbordes emocionales ante pequeños estímulos, anhedonia que provoca un importante menoscabo laboral, siendo su reposo parte integral en su rehabilitación; 3.- informe psicológico de doña Paola Roxana Parra Contreras confeccionado por el psicólogo don Luis Antonio Tapia Macaya, cédula de identidad N° 16.284.409-1, con fecha 11 de noviembre de 2015, el cual tiene como resultado una **depresión persistente**.

Que lo anterior, se encuentra corroborado por los dichos de los testigos presentados por la actora, don Lupercio Cuevas Guzmán y el psicólogo don Luis Tapia Macaya.

Que de la prueba rendida, singularizada precedentemente, ha quedado acreditado que la demandante doña Paola Parra Contreras, ha sufrido un daño moral con ocasión del fallecimiento de su cónyuge. Que el daño moral que ha sufrido se hace consistir en depresión, la que se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado, es una forma de expresión de dolor que se manifiesta con síntomas psíquicos y somáticos, **motivo por el cual se hará lugar al daño moral demandado por doña Paola Parra Contreras, cuyo monto se determinará en lo resolutivo de la presente sentencia.**

Que, en cuanto al daño moral, demandado por Emilia Villalobos Parra, es dable señalar, que tal como se indicó precedentemente, la familia no volverá a ser la misma, los planes y proyectos a futuro deberán reestructurarse a la nueva realidad, donde las condiciones familiares y económicas han cambiado producto del fallecimiento de don David Villalobos R. Que, se ha rendido **prueba testimonial** por la parte demandante, declarando 2 testigos al efecto, don Lupercio Cuevas Guzmán y don Luis Tapia Macaya, los que en síntesis expresan que se ocasionó perjuicio a las actoras por la pérdida de su cónyuge y padre don David Villalobos R. Que, Emilia, cuando falleció su padre, tenía 2 años. Paola, queda sin su cónyuge y sin el padre de su hija y no tener claro, hasta el día de hoy, como fue su muerte, le causó la desesperación de quedarse sola, porque él era el sustento del hogar y de la noche a la mañana, se quedaron sin nada. A Emilia, la familia la ha tenido que estar apoyando para que entienda, porque desapareció su papá.

Asimismo, don Luis Tapia Macaya, expresa que dado sus conocimientos técnicos en psicología y por su expertis en los tratamientos de muchas otras varias consultas psiquiátricas, como el de autos, es evidente y no cabe lugar a dudas, el daño diagnosticado consecuencia del fallecimiento del cónyuge y padre de las demandantes de autos, **motivo por el cual se hará lugar al daño moral demandado por Emilia Villalobos Parra, cuyo monto se determinará en lo resolutivo de la presente sentencia.**

**Trigésimo tercero:** Que, determinado lo anterior, cabe señalar que una de las alegaciones de la demandada, es la existencia de un **cúmulo de indemnizaciones a favor de las actoras.**

Que, al este respecto, es dable señalar que el artículo 69 de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, dispone que cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, **también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.** En





consecuencia, sin perjuicio de las prestaciones de seguridad social que establece el artículo 69 de la ley en comento, si hay culpa o dolo del empleador o de un tercero, tanto el trabajador como los terceros perjudicados pueden demandar indemnizaciones para reparar el daño causado por el accidente, conforme al derecho común, es decir, a los regímenes que correspondan según el Código Civil. Lo único que la norma establece especialmente es que, cualquiera sea el régimen aplicable, podrá reclamarse la reparación del daño moral.

Que, así las cosas, sin perjuicio de que las actoras, reciban una pensión de viudez y orfandad, según se indica en el oficio emitido por el IST, y acompañado a estos autos, a folio 173, según preceptúa el artículo 69 de la Ley N° 16.744, pueden igualmente reclamar, en sede civil, la reparación del daño moral, **motivo por el cual, se procederá a rechazar la presente alegación.**

**Trigésimo cuarto: Que en cuanto a la relación de causalidad entre los hechos descritos y los perjuicios alegados.**

Que así, alega la demandada, la responsabilidad del empleador demandado en éstos autos, nace cuando el accidente se deba a su culpa, conforme a lo que previene el artículo 44 del Código Civil, culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve, que es precisamente, según dicha norma, la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, y que se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. En consecuencia, el empleador debe responder de culpa leve y ello no significa que deba emplearse en la seguridad de los trabajadores el mismo nivel relativo de cuidado que el exigido para proteger, por ejemplo, la integridad de las cosas. De acuerdo con las reglas generales, el nivel de cuidado exigible depende del valor de los bienes jurídicos amenazados por la conducta del responsable.

Que, habiéndose hecho referencia a la culpa contra legalidad en el considerando vigésimo octavo, y conforme a los hechos controvertidos establecidos en la presente causa, se debe hacer mención a la **relación de causalidad de los hechos descritos con los perjuicios ocasionados.**

Que, conforme a la prueba rendida es posible advertir una relación de causalidad entre los hechos demandados y los perjuicios alegados, ya que, a consecuencia del accidente acaecido el día 27 de marzo de 2014, la parte demandante, compuesta por doña Paola Parra Contreras y Emilia Villalobos Parra, sufrieron el fallecimiento de su cónyuge y padre don David Villalobos R., y que como consecuencia de lo anterior, la parte demandante doña Paola Parra, sufre de depresión persistente, por lo tanto conforme lo que se ha relatado en la presente sentencia, y Emilia Belén, debe crecer sin la presencia paterna, por lo anterior **se encuentra acreditada la existencia de la relación de causalidad entre los hechos demandado y los perjuicios alegados.**

**Trigésimo quinto:** Que, además, es preciso analizar la alegación de la demandada, consistente en **la exposición imprudente al daño en relación a los criterios de cuantificación del daño moral**, toda vez que, indica, deben ceñirse al mérito de las probanzas rendidas y a otros criterios de determinación. Agrega, la demandada que la exorbitante suma de dinero que demanda el actor se aleja de lo que se puede entender como una reparación, debe tener un respaldo probatorio, que en ningún caso puede llegar a constituir un enriquecimiento, sino más bien una reparación.



Aduce, que para el caso que se estime que existe responsabilidad civil de su representada en los hechos por los cuales se ha accionado, debe sujetarse a reducción la indemnización por daño moral, pues en ella se debe considerar la omisión del sr. Villalobos en el cumplimiento de sus funciones, toda vez que dichas funciones eran precisamente de prevencionista de riesgo, dentro de sus funciones específicas asignadas, era la de auditar la conducción en terreno, también denominada “conducción vigilada” que tiene por finalidad, recabar información sobre la conducción a la defensiva, respeto de normas de tránsito y otra serie de aspectos sobre la seguridad en la conducción de los camiones de la empresa. Consecuencia de lo anterior, es que el prevencionista de riesgo debe, en el marco de sus funciones, y en especial en el cumplimiento del cometido en la “conducción vigilada” controlar y advertir al conductor el cumplimiento irrestricto de las normas de seguridad asociadas a la conducción.

Que, tal como se ha indicado, el tracto camión que se utilizaba el día del accidente, presentaba a lo menos el mes de septiembre del año 2013, problemas con sus frenos, lo cual aparece en los antecedentes acompañados a estos autos de la **carpeta investigativa RUC 1400308529-6**, en la cual constan los varios ajustes efectuados a los frenos del camión. Que, en consecuencia, al haberse concluido en los informes efectuados la existencia de una cristalización de los frenos del tracto camión. Asimismo, la velocidad de 83 kilómetros por hora, en que conducía don José Saldivia, en una zona restringida de 30 kilómetros por hora, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley N° 18.290, que hace responsable al conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, más no al copiloto, **se procederá a rechazar la alegación consistente en la exposición imprudente al daño.**

**Trigésimo sexto:** Que, en cuanto a establecer el monto del daño moral demandado se tendrán en consideración los informes acompañados por la actora, a los que se alude en el motivo trigésimo segundo, donde se concluye que a razón de la pérdida de su cónyuge la demandante doña Paola Parra Contreras, sufre de depresión persistente, además, se suma el hecho de ser la muerte de inesperada y repentina lo que genera una abrupta ruptura en la vida de cada una de las demandantes. Además, la pérdida genera una profunda desorganización psíquica, el objeto que provoca el concepto de pareja y paternidad, ya no existe, dejando un vacío insustituible.

Que, la cónyuge del fallecido, presenta claros indicadores de encontrarse afectada de una depresión persistente y de larga data, según los informes acompañados y analizados. Que conforme lo expuesto se tendrá en cuenta dicha argumentación al momento de establecer el monto del daño moral a que se dio lugar.

**Trigésimo séptimo:** Que la prueba que no se analiza en forma pormenorizada en nada altera lo resuelto en la presente sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329 del Código Civil; y 160, 170, 254, 309, 318, 348 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículo 169 de la Ley N° 18.290, **SE DECLARA:**

**I.- En cuanto a la objeción de documentos:**

Que se niega lugar a las objeciones de documentos, formuladas con fecha 20 de junio, 4 y 22 de julio de 2019.



**II.- En cuanto a la tacha:**

Que se niega lugar a la tacha formulada con fecha 12 de junio de 2019.

**III.- En cuanto al fondo:**

Que se **hace lugar a la demanda principal** de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley N° 18.290, interpuesta por don Eduardo Alberto Contreras Lagos, abogado, en representación de doña **Paola Roxana Parra Contreras**, y de **Emilia Belén Villalobos Parra**, en contra de la empresa **TAD SpA**, representada por don Fernando Ramón Díaz Contreras y/o don Jaime Roberto Vilajuana Rigau en su calidad de continuadora legal de Transportes Alberto Díaz Parraguez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L, y **solidariamente** en contra de doña **María Silvia del Rosario Contreras Romo**; don **Marcelo Antonio Díaz Contreras**; don **Fernando Ramón Díaz Contreras**; don **Alberto Andrés del Carmen Díaz Contreras** y doña **Sylvia Valericia Díaz Contreras**, todos individualizados, **sólo** en cuanto se condena a las demandadas a **pagar por concepto de daño moral** en favor de doña Paola Parra Contreras, la suma ascendente a \$40.000.000.- y en favor de Emilia Belén Villalobos Parra la suma de \$60.000.000.- más intereses y reajustes legales, los cuales deberán calcularse a partir que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo de las sumas indicadas.

Que, conforme a lo resuelto cada parte soportará sus costas.

**IV.- En cuanto a la demanda subsidiaria:**

Que no se emitirá pronunciamiento respecto a la petición subsidiaria, por innecesario.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 855-2018

Dictada por doña **Cecilia Sagredo Olivares**, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Viña del Mar, trece de Julio de dos mil veinte**



